



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



TESIS

“EL EFECTO DEL PROCESO INMEDIATO SOBRE LA CARGA PROCESAL Y EL DERECHO DE DEFENSA”

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
ABOGADO**

**PRESENTADO POR
ROXANA MARIBEL PISFÍL PARRAS**

**ASESOR
Dr. HUMBERTO FALLA LAMADRID**

LAMBAYEQUE, 2019

Tesis denominada "EL EFECTO DEL PROCESO INMEDIATO SOBRE LA CARGA PROCESAL Y EL DERECHO DE DEFENSA",, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por :



Roxana Maribel Pisfil Parras

BACHILLER



Dr. Humberto Falla Lamadrid

ASESOR



APROBADO POR:



Abog. Carlos Martínez Oblitas

PRESIDENTE



Dr. Amador Mondoñedo Valle

MIEMBRO



Abog. Cesar Vargas Rodríguez

VOCAL

Dedicatoria:

Este trabajo de investigación se lo dedico principalmente a Dios, por ser mi inspirador y mi fortaleza para seguir en este proceso y poder obtener una de mis metas más deseadas.

A mi familia por su apoyo incondicional que he recibido en el transcurso de mi carrera profesional.

Agradecimiento:

A la Universidad y sus docentes por haber compartido sus conocimientos a lo largo de mi carrera profesional.

INDICE

INDICE	iv
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I.....	13
ASPECTOS METODOLOGICOS	13
1.1. Realidad Problemática	13
1.1.1. Planteamiento del Problema.....	13
1.1.2. Formulación del Problema	15
1.2. Justificación e Importancia del Estudio	15
1.2.1. Justificación del Estudio	15
1.2.2. Importancia del Estudio	16
1.3. Objetivos	17
1.3.1. Objetivo General	17
1.3.2. Objetivos Específicos.....	17
1.4. Hipótesis.....	17
1.5. Variables	17
1.5.1. Variable Independiente	17
1.5.2. Variable Dependiente.....	18
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección	18
1.6.1. Métodos.....	18
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico	18
1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico.....	18
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo.....	18
1.6.1.4. Método Inductivo	19
1.6.2. Técnicas.....	19
1.6.2.1. Análisis Documental	19

1.6.2.2. Observación.....	19
1.6.2.3. Encuesta	20
CAPITULO II	21
2.1. EL PROCESO INMEDIATO EN LA DOCTRINA.....	21
2.1.1. Definición de Proceso Inmediato.....	21
2.2. EL PROCESO COMÚN.....	23
2.2.1. Etapa de Investigación Preliminar e Investigación Preparatoria.....	23
2.2.2. Etapa Intermedia.....	25
2.2.3. Etapa de Juzgamiento	26
2.3. LOS PROCESOS ESPECIALES	27
2.3.1. PROCESO INMEDIATO	27
2.3.1.1. CONCEPTO	28
2.3.1.2. ORIGEN - FUENTE	29
2.3.1.3. ANTECEDENTES	29
2.3.2. EL PROCESO INMEDIATO DESPUES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194.....	29
2.3.3. ANALISIS DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO 1194.....	31
2.4. SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO	38
2.5. LA AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO ...	39
2.6. LA AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO	41
2.7. CONSECUENCIAS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194.....	42
2.8. EL FISCAL PIERDE LA AUTONOMÍA DE INVESTIGAR	42

CAPITULO III.....	45
EL DERECHO DE DEFENSA Y LA CARGA PROCESAL.....	45
3.1. EL DERECHO DE DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL..	45
3.2. LA DEFENSA PENAL.....	49
3.2.1. DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA TÉCNICA	52
3.2.2. OBLIGATORIEDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA.....	60
3.4. EL PODER DEL ESTADO.....	64
CAPÍTULO IV.....	68
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	68
4.1. Análisis de los resultados:	68
4.1.1. Resultados del análisis estadístico.....	68
4.1.2. Resultados del análisis jurisprudencial.	69
4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.	81
CAPÍTULO V	96
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	96
5.1. Discusión de los Resultados	96
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar el tratamiento doctrinario del proceso inmediato a nivel nacional e internacional”.....	96
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir el tratamiento legislativo del derecho de defensa y la previsión del control de la carga procesal en el Código Procesal Penal”.....	97
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Verificar jurisprudencialmente la protección del derecho de defensa en el proceso inmediato”.....	99

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de generar una propuesta de cambio normativo respecto a la estructura del proceso inmediato”.	100
5.2. Resultado De Validación De Variables	101
5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Incorrecta aplicación del proceso inmediato.	101
5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Carga procesal y vulneración del derecho de defensa.	102
5.3. Contrastación De Hipótesis	103
CONCLUSIONES	104
RECOMENDACIONES	106
Bibliografía	107
ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta	110
ANEXO : Resultados de la Solicitud presentada al Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.	114

RESUMEN

Actualmente en el Perú, una de las preocupaciones del legislador, es la de dotar de una mayor celeridad al proceso penal. En ese afán de agilización del proceso se han ido adoptando diversos mecanismos tendentes a simplificarlo, implementando el proceso especial inmediato, en donde se busca acercar el momento de la comisión del hecho delictivo a la finalización del proceso con la correspondiente sentencia definitiva y ello en aras no sólo del derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas, sino también para dar satisfacción a las legítimas demandas ciudadanas de seguridad.

Se consideró que, mediante los juzgamientos a toda velocidad, se ofrecía una mejor respuesta al aumento de la criminalidad, se creyó frenar la impunidad, se proyectó a la sociedad en general una imagen de mano dura gubernamental y aparentaron estar mejor protegidos los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal.

Sin embargo, la celeridad con que se tramita este proceso, ha llegado a considerarse que un periodo tan corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento, afectando así sus derechos fundamentales

Palabras Claves: Proceso Inmediato, Carga Procesal, Derecho De Defensa

ABSTRACT

Currently in Peru, one of the concerns of the legislator, is to provide greater speed to the criminal process. In this effort to streamline the process have been adopting various mechanisms aimed at simplifying it, implementing the immediate special process, which seeks to bring the moment of the commission of the criminal act to the conclusion of the process with the corresponding final ruling and this in favor not only of the right of the parties to a process without undue delays, but also to give satisfaction to legitimate citizen security demands.

It was considered that, through the judgments at full speed, a better response to the increase in crime was offered, it was believed that the impunity was curbed, a strong government image was projected to the society in general, and the rights of the victims appeared to be better protected. victims, witnesses and other subjects involved in the criminal process.

However, the speed with which this process is processed, has come to be considered that such a short period does not offer the people involved the due opportunity to exercise their defense in the terms in which it is guaranteed in our legal system, thus affecting their rights fundamental

Keywords: Immediate Process, Procedural Load, Defense Law

INTRODUCCIÓN

La presente investigación torna su interés hacia la realidad procesal en el ámbito penal que en los últimos tiempos ha ocupado su interés en la abreviación de los tiempos que se utilizan para conseguir la investigación de hechos delictivos y la aplicación de las sanciones respectivas. Tal es así que, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004 se estableció dos formas de proceso; siendo la primera de ellas, la del proceso común y el segundo tipo de proceso es el inmediato. El tratamiento que recibe el procesado en este tipo especial de proceso es distinto pues en una sola audiencia se decidirá si es culpable o inocente de los cargos imputados.

Sin embargo, debido a la celeridad con que se tramita este proceso, ha llegado a considerarse que un periodo tan corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento, afectando así sus derechos fundamentales.

En este marco de la realidad es que se proyectó la formulación del problema que se identifica mediante la construcción de la siguiente interrogante: ¿De qué manera la incorrecta aplicación del proceso inmediato genera carga procesal y vulneración del derecho de defensa?

Dicho cuestionamiento permitió llegar a una aseveración inicial generada en base al conocimiento previo a la investigación, desde una percepción a priori de la realidad y se construyó de la siguiente manera: Si logramos demostrar que existe

una incorrecta aplicación del proceso inmediato; entonces, diremos que tal situación repercute directamente en la carga procesal y vulneración del derecho de defensa.

Ha de tenerse en cuenta que las construcciones anteriores tienen en común los componentes que han servido de ejes temáticos a la investigación, estas son las variables que bajo una relación causal permiten el orden lógico de la misma, puesto que han permitido elaborar los objetivos específicos que al constituirse como metas de la investigación, incorporan los contenidos a través de los capítulos que a continuación se reseñan:

El Capítulo I, se ha ocupado de la construcción metodológica que se desarrolló en el proyecto que ha dado origen a la tesis, así se describen los parámetros lógicos sobre los cuales se ha conducido la investigación y han permitido finalmente contrastar las hipótesis dotando de un carácter científico a esta labor académica.

Ya en el Capítulo II, ha tenido por ocupación el desarrollo doctrinario del proceso inmediato, buscando la definición más adecuada del mismo y creando la descripción de los elementos y su estructura procesal.

Luego en el Capítulo III se ha desarrollado lo concerniente al derecho de defensa y la carga procesal que operan en razón de la aplicación del proceso inmediato, recopilando información de los tipos de defensa reconocidos y la obligatoriedad que asume el derecho defensa como garantía procesal.

Seguidamente en el Capítulo IV se han mostrado los resultados del análisis de la realidad, teniendo en cuenta el aspecto estadístico que permitió establecer los lineamientos que identifican el crecimiento de la carga procesal, así como la observación del criterio jurisdiccional que se está usando al momento de la

incoación del proceso inmediato mediante la revisión de las actas de registro de audiencia de incoación de proceso inmediato.

Finalmente, en el Capítulo V, se puede ubicar la contrastación de la hipótesis que se ocupa inicialmente de la discusión sobre cada uno de los objetivos específicos, cuyos resultados han permitido alcanzar la validación de las variables, afirmaciones con las que se construyó la hipótesis final que al ser comparada con la inicial permitieron determinar una contrastación positiva.

Tal connotación provocó la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que en esta ocasión se ponen al criterio evaluador del jurado de la tesis.

La Autora.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema.

Actualmente en el Perú, una de las preocupaciones del legislador, es la de dotar de una mayor celeridad al proceso penal. En ese afán de agilización del proceso se han ido adoptando diversos mecanismos tendentes a simplificarlo, implementando el proceso especial inmediato, en donde se busca acercar el momento de la comisión del hecho delictivo a la finalización del proceso con la correspondiente sentencia definitiva y ello en aras no sólo del derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas, sino también para dar satisfacción a las legítimas demandas ciudadanas de seguridad.

Tal es así que, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004 se estableció dos formas de proceso; siendo la primera de ellas, la del proceso común en el que el proceso se desarrolla en tres fases: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y Juzgamiento; mientras que el segundo tipo de proceso es el inmediato; el cual presenta formas rápidas de terminar un proceso aplicando el principio de celeridad y economía procesal; implementándose así un tipo de “justicia rápida y furiosa” como algunos autores lo califican. El tratamiento que recibe el procesado en este tipo especial de proceso es distinto pues en una sola audiencia se decidirá si es culpable o inocente de los cargos imputados.

Considerándose que, con tales juzgamientos a toda velocidad, se ofrecía una mejor respuesta al aumento de la criminalidad, se creyó frenar la impunidad, se proyectó a la sociedad en general una imagen de mano dura gubernamental y aparentaron estar mejor protegidos los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal. Sin embargo, debido a la celeridad con que se tramita este proceso, ha llegado a considerarse que un periodo tan corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento, afectando así sus derechos fundamentales. Ante ello nos formulamos la siguiente interrogante ¿De qué forma la aplicación del Proceso Inmediato vulnera el derecho a la defensa?

Mediante la aplicación de un proceso inmediato se obstaculiza la posibilidad de construir una adecuada teoría del caso por parte del representante del Ministerio Público; y de igual modo, se impide una adecuada defensa en pro del imputado; todo ello, en vista que el Proceso Inmediato se incoa en un plazo irrazonable que dificulta construir una base fáctica para la determinación de la pena adecuada, teniendo como resultado que las penas impuestas resulten ser gravísimas. En tal sentido, estamos convencidos que con la aplicación de un proceso inmediato se vulneran derechos como al Debido Proceso, a la Defensa, a la Presunción de Inocencia y otros derechos más que pudiéramos advertir en el transcurso de la presente investigación.

En torno a la discusión presentada, podemos indicar que la idea central de nuestro planteamiento problemático está claramente establecida; esto es, enfocar la atención investigativa hacia la necesidad de determinar si en sentido contrario a lo que se espera, la incorrecta aplicación del proceso inmediato genera carga procesal en vez de aminorarla; además de la vulneración del derecho de defensa. Razones por las que nos proyectaremos a formular la siguiente interrogante, la cual servirá como punto de partida en nuestra labor académica.

1.1.2. Formulación del Problema

¿De qué manera la incorrecta aplicación del proceso inmediato genera carga procesal y vulneración del derecho de defensa?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1. Justificación del Estudio

Fácticamente consideramos justificada nuestra investigación desde dos aspectos que requieren tal vez de un juicio de ponderación; en primer lugar, la sociedad, y las legítimas demandas ciudadanas de seguridad destinadas a una mejor protección de los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal; mientras por la contraparte, las personas involucradas en eventos criminales y la debida oportunidad que se les debe brindar para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento.

Legalmente veremos justificada la investigación en el contenido de los artículos 446 al 448 del Código Procesal Penal; referidos a los supuestos de aplicación del proceso inmediato, la audiencia única de incoación de proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva y la audiencia única de juicio inmediato; de la misma forma, nos enfocaremos en el estudio del inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, referido al derecho a la defensa.

Justificamos doctrinariamente el presente trabajo académico, toda vez que lograremos ubicar los conceptos, teorías e ideas adecuadas que servirán de base a futuros planteamientos sobre nuestro tema; teniendo en cuenta ello, realizaremos un estudio doctrinario respecto al proceso inmediato y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico y en legislaciones extranjeras; asimismo, nos ocuparemos del estudio del tratamiento legislativo del derecho de defensa y la previsión del control de la carga procesal en el Código Procesal Penal.

1.2.2. Importancia del Estudio

La importancia del presente trabajo de investigación radica en el estudio doctrinario y jurisprudencial que realizaremos en torno al proceso inmediato a fin de idear estratégicamente una propuesta de cambio normativo respecto a su estructura; con la finalidad de evitar vulneraciones a derechos fundamentales del imputado, principalmente, del derecho a la defensa; sin dejar de lado las demandas ciudadanas de seguridad destinadas a una mejor protección de los derechos de las víctimas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la incorrecta aplicación del proceso inmediato genera carga procesal y vulneración del derecho de defensa.

1.3.2. Objetivos Específicos

- ✓ Desarrollar el tratamiento doctrinario del proceso inmediato a nivel nacional e internacional.
- ✓ Describir el tratamiento legislativo del derecho de defensa y la previsión del control de la carga procesal en el Código Procesal Penal.
- ✓ Verificar jurisprudencialmente la protección del derecho de defensa en el proceso inmediato.
- ✓ Analizar la posibilidad de generar una propuesta de cambio normativo respecto a la estructura del proceso inmediato.

1.4. Hipótesis

Si logramos demostrar que existe una incorrecta aplicación del proceso inmediato; entonces, diremos que tal situación repercute directamente en la carga procesal y vulneración del derecho de defensa.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

Incorrecta aplicación del proceso inmediato.

1.5.2. Variable Dependiente

Carga procesal y vulneración del derecho de defensa.

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.6.1. Métodos

En nuestra investigación hicimos uso de los siguientes métodos, los cuales nos permitieron desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico

Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto a las ramas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico

Este método fue empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico penal y aquel concerniente al ámbito procesal, lo cual nos permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo

Al emplear el método hipotético deductivo se podía verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado, desde

comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

1.6.1.4. Método Inductivo

La aplicación de este método nos ha permitido analizar el material de estudio, el mismo que ha servido de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo de nuestro tema, hicimos uso de las técnicas de recolección de la información que nos permitieron establecer los parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados.

1.6.2.1. Análisis Documental

Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que han sido publicados en materia de Derecho Penal y Procesal Penal, específicamente respecto a los temas de Proceso Inmediato, El Derecho a la Defensa y de la Carga Procesal.

1.6.2.2. Observación

Se utilizaron la guía de observación, con la cual se observó la realidad que presentan los Juzgados competentes para resolver los casos de Procesos Inmediatos en el

Distrito Judicial de Lambayeque, analizando los casos específicos con respecto a nuestro planteamiento.

1.6.2.3. Encuesta

Se emplearon la guía de encuesta; la cual fue aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes vertieron sus opiniones respecto de la problemática detectada.

1.6.3. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

1.6.3.1. La Ficha

Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, que sirvió para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación.

1.6.3.2. La Guía de Observación

Instrumento que se utiliza en la técnica de la observación, que sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación.

1.6.3.3. La Guía de Entrevista

Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la entrevista, y ha consistido en un conjunto de preguntas que se elaboraron para que sirvan de orientación en el diálogo que se debe tener con los entrevistados, quienes son los conocedores del tema.

CAPITULO II

2.1. EL PROCESO INMEDIATO EN LA DOCTRINA.

La finalidad del desarrollo de este capítulo obedece al reconocimiento de las posturas existentes sobre la definición del proceso inmediato bajo el carácter de especial, con la intención de tener en claro aquella que se pueda considerar más adecuada, por estar ajustada a los parámetros que marca la norma constitucional dado que la ruta que distingue al Derecho Penal y al proceso en si tiene un corte garantista, lo cual se buscará verificar en la legislación que se ha construido en nuestro ordenamiento nacional sobre el proceso bajo estudio.

2.1.1. Definición de Proceso Inmediato.

Se ha de tomar como punto de partida en la búsqueda de la definición adecuada, lo señalado por el investigador Reyna Alfaro (2015), quien en su libro titulado *Manual de Derecho Procesal Penal*, presenta la siguiente definición sobre Proceso Inmediato.

El proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación (pág. 107).

La finalidad del proceso inmediato es la simplificación y la celeridad de las etapas del proceso y está destinado para su aplicación en aquellos casos en que no se requiere mayor investigación por parte del representante del Ministerio Público, para lograr la convicción del juez respecto del caso en concreto. Aun así, estamos convencidos que por más “fácil” que pareciera la teoría del caso a exponerse, siempre se debe garantizar la adecuada defensa al procesado, al constituir ésta una manifestación del debido proceso, máxime si apelamos al enfoque garantista del derecho penal.

Mendoza Calderón (2015), en su obra titulada: *El Proceso Inmediato en el Proceso Penal Peruano (Aplicación del Decreto Legislativo N° 1194)*, indica lo siguiente:

El Proceso Inmediato es un mecanismo de simplificación procesal, en el que se busca que un proceso penal, por su especial característica (suficiencia probatoria que ponga de manifiesto la existencia de un delito y la vinculación con el imputado, la flagrancia delictiva, o la confesión del imputado, (aparejada esta de elementos de convicción), pueda ser más eficiente y célere en la resolución y sanción del delito (pág. 74).

Creemos que la suficiencia probatoria de la que hace alusión el autor, y que justifica la incoación de proceso inmediato; no es algo asegurado, pues cada caso concreto demanda un análisis específico; estudio que se dificulta por el escaso tiempo de los procesos inmediatos. Frente a tal sentido, estamos convencidos en que la resolución y sanción del delito a causa de un proceso inmediato puede ser una clara muestra de celeridad mas no asegura una correcta decisión por parte de los operadores jurídicos.

Benavente Chores (2011), señala en su artículo científico titulado: *La Acusación Directa y el Proceso Inmediato en el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116- Lima*: “El proceso inmediato es un tipo de proceso especial, al darse una situación extraordinaria que conlleva a la abreviación del proceso penal, pues no se desarrollan las fases de investigación preparatoria e intermedia.” (pág. 24).

Como es conocido un proceso común se desarrolla en diversas etapas como lo es la Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia culminando en la Etapa de Juzgamiento; mientras que en el proceso especial inmediato se abrevian tales etapas y se concentran en una sola. El concepto hasta ahora abarcados nos servirá para adentrarnos en el conocimiento del alcance de un proceso inmediato; lógicamente, durante el desarrollo de nuestra investigación trataremos más a fondo tal institución del derecho procesal penal.

2.2. EL PROCESO COMÚN

Nuestro Código Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo 957, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio del 2004, fue creado con la finalidad de transformar el sistema de justicia penal.

Asimismo, implica la uniformidad de la legislación procesal penal peruana, pues actualmente los procesos penales se tramitan al amparo de tres códigos procesales: Código de Procedimientos Penales de 1940, Código de Ejecución Penal de 1991, Código Procesal Penal del 2004.

En tal sentido, nuestro sistema de justicia penal está caracterizado por ostentar como regla general la tramitación de los delitos en el proceso ordinario también denominado proceso común, el cual consta de tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia, y la etapa del juzgamiento, reconociéndose una etapa previa a la investigación (diligencias preliminares o investigación preliminar).

2.2.1. Etapa de Investigación Preliminar e Investigación Preparatoria

En esta etapa el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria (artículo 330.1).

Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento del Fiscal y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente (artículo 330.2).

Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó el fiscal, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado, y que, si fuere el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria (artículo 336.1).

En tal sentido, la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria es la comunicación que el fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica, y, por ende, que se va a realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estimen pertinentes.

Según **PEÑA – CABRERA FREYRE** (2006), la investigación preparatoria tiene por finalidad recopilar los medios de prueba de cargo, que sirvan al fiscal de la investigación preparatoria para sostener válidamente la imputación delictiva que recae sobre el imputado, determinando la forma de comisión del delito, los medios utilizados para su perpetración, los móviles, el grado de perfección delictiva y la individualización de los involucrados de conformidad con la relevancia de su participación en el evento criminoso, la identidad de la víctima y la cuantificación de la magnitud del daño causado por los efectos perjudiciales de la conducta criminal; de común idea con lo establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal 2004 (PEÑA - CABRERA FREYRE, pág. 113).

Sin embargo, debemos anotar, que no es del todo cierto que la finalidad de la investigación preparatoria sea recopilar los elementos de convicción para que el fiscal sostenga su imputación ante el Órgano Jurisdiccional, pues el artículo 321 señala que: “la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de

descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, ...”. De lo que se infiere que también con los elementos de convicción de descargo se pueda establecer que la incriminación no es delictuosa, o que el imputado no resulta vinculado al hecho delictual, en cuyo caso el fiscal no formulará acusación, sino el requerimiento de sobreseimiento de la causa, de conformidad con el artículo 344.1.

2.2.2. Etapa Intermedia

En la etapa intermedia se decide si existe o no suficiente fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento. De esta manera el juez de la investigación preparatoria, decidirá, al término de aquella etapa, escuchando antes a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación propuesta por el fiscal o si, efectivamente, debería dictarse el sobreseimiento de la causa.

PEÑA – CABRERA FREYRE (2006), anota que: “la etapa intermedia es el puente entre ambos planos de la persecución penal, de la investigación preparatoria y del juzgamiento, que tiene por finalidad la viabilidad de este último y su contraparte, la cesación de la persecución penal, por lo que su importancia merece ser analizada de forma singular y particularizada” (PEÑA - CABRERA FREYRE, pág. 113).

Entonces, los actos que se desarrollan en esta etapa están relacionados con la acusación, el sobreseimiento, la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento.

Para **BINDER** (2000), la etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. Esta etapa consiste en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos (BINDER, pág. 245).

En el Código Procesal Penal 2004, la etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal; la cual se caracteriza porque es dirigida por el juez de investigación preparatoria y se funda en la idea de que los juicios deben ser previamente preparados, a fin de que lleguen sólo los conflictos realmente relevantes. Por eso, en esta etapa se evalúa la investigación preparatoria y culmina en la decisión judicial que se opte: o expedir la resolución de sobreseimiento, o continuar el proceso (la acusación fiscal, el desarrollo de la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento).

JULIO MAIER citado por **URTECHO BENITES** (2014), apunta que el fin esencial que persigue el procedimiento intermedio es el control de los requerimientos acusatorios o conclusivos del Ministerio Público, que hacen mérito de la etapa preliminar, porque la justificación política en esta etapa es de prevenir la realización de juicios mal provocados por acusaciones con defectos formales o insuficientemente fundada (URTECHO BENITES, pág. 118).

2.2.3. Etapa de Juzgamiento

El juzgamiento es la etapa estelar del proceso. Se caracteriza por desarrollarse bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y la contradicción en la actuación probatoria.

El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional, de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú.

El juzgamiento se constituye en el corolario del proceso penal, donde se dilucidará finalmente la situación del imputado, en cuanto a una condena penal o a una absolución de la acusación fiscal. El juzgamiento, estrictamente hablando, es una actuación

típicamente jurisdiccional, pues es dirigida y ejecutada por los órganos que administran justicia penal en nuestro país.

2.3. LOS PROCESOS ESPECIALES

Los procesos especiales tienen por finalidad abreviar el proceso común, teniendo como objeto los principios de celeridad y economía procesal.

Para **NEYRA FLORES** (2010), los procesos especiales son aquellos que se particularizan en razón de la materia a la que están referidas; dichos procesos están previstos para circunstancias o delitos específicos, o en razón de las personas, o en los que se discute una concreta pretensión punitiva (NEYRA FLORES, págs. 425 - 426).

El Código Procesal Penal 2004, reconoce en su Libro Quinto a los Procesos Especiales, regulando en sus diferentes secciones los siguientes procedimientos especiales: Sección I (Proceso Inmediato), Sección II (Proceso por Razón de la Función Pública), Sección III (Proceso de Seguridad), Sección IV (Proceso por Delito de Ejercicio Privado de Acción Penal), Sección V (Proceso de Terminación Anticipada), Sección VI (Proceso por Colaboración Eficaz), y Sección VII (Proceso pro Faltas).

2.3.1. PROCESO INMEDIATO

El Proceso Inmediato, vigente desde el 28 de noviembre del 2015 en todo el país, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1194.

El Proceso Inmediato se encuentra regulado en la Sección I del Libro Quinto del Código Procesal Penal 2004, que abarca los artículos 446 al 448.

2.3.1.1. CONCEPTO

El proceso inmediato, es un proceso especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca al máximo el procedimiento. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente acusación y que ésta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia (SÁNCHEZ VELARDE, pág. 364).

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta de necesidad de realizar la investigación preparatoria, debido a la existencia de flagrancia delictiva, confesión del imputado en la comisión del delito y/o porque los elementos de convicción evidencian la materialización del ilícito penal y la participación del imputado.

Por lo tanto, este proceso puede ser definido como aquel proceso especial que, en aras de la celeridad de los procesos penales, pasa directamente de la etapa de diligencias preliminares de investigación al juicio oral, obviando llevar a cabo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia del proceso ordinario.

Asimismo, mediante el Acuerdo Plenario 006 – 2010 / CJ – 116, en su fundamento jurídico 7, señaló que, el proceso inmediato es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad de organizar la respuesta del sistema con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación¹.

¹ Acuerdo Plenario 006 – 2010 / CJ – 116, de fecha 16 de noviembre del 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.3.1.2. ORIGEN - FUENTE

El proceso inmediato tiene sus orígenes en dos instituciones, el juicio directo (flagrancia o confesión) y el juicio inmediato (prueba evidente) del Código de Procedimiento Penal Italiano de 1989.

2.3.1.3. ANTECEDENTES

En nuestro ordenamiento, el proceso inmediato tiene en cierto modo su antecedente más directo en la Ley 28122, de fecha 16 de diciembre del 2003, la misma que regula la conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, establece la realización de una instrucción judicial breve, similar a la instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español.

Sin embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que en el proceso inmediato del Código Procesal Penal 2004, no es precisa la existencia de una, siquiera breve, fase de investigación formal, sino que simplemente en base a lo actuado preliminarmente, el fiscal formula requerimiento.

2.3.2. EL PROCESO INMEDIATO DESPUES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194

Como un antecedente obligatorio diremos que mediante Resolución 30336, el Poder Legislativo delego en el ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, para así fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Es bajo este contexto que, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1194, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de agosto del 2015 y entro en vigencia el 28 de noviembre del 2015.

Este decreto ha modificado uno de los procesos especiales que regula el Código Procesal Penal del 2004, este es el denominado proceso inmediato prescribiendo la obligatoriedad por parte de la fiscalía a instaurar el mencionado proceso.

Con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, el proceso inmediato era un mecanismo de simplificación procesal regulado con incoación de carácter facultativo por parte del Ministerio Público, es decir este proceso inmediato constituía una alternativa a discreción del fiscal

Sin embargo, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1194, el cual modificó varios artículos del Código Procesal Penal, la incoación de este proceso especial se ha convertido en “obligatoria”.

Esta afirmación permite sostener que estamos ante un nuevo proceso inmediato, por las siguientes razones:

- i) Antes constituía una alternativa o discreción del fiscal, quien podía o no incoarlo cuando concurría cualquiera de los supuestos señalados en la norma procesal. Empero, de acuerdo a las nuevas reglas del proceso inmediato, el fiscal tiene ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato.
- ii) Asimismo, es menester destacar que este mecanismo de simplificación procesal obligatorio en su regulación normativa modificada ha sido extendido a nuevos supuestos. El proceso inmediato será aplicable a delitos de incumplimiento de obligación alimentaria (omisión a la asistencia familiar) y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

- iii) Viene a constituir un nuevo proceso inmediato, porque a efectos de su aplicación se ha establecido un nuevo procedimiento de audiencias: audiencia de incoación de proceso inmediato, audiencia de control de acusación y audiencia de juicio inmediato.

2.3.3. ANALISIS DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO 1194

El inciso 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, regula los supuestos de aplicación del proceso inmediato, los cuales son:

2.3.3.1. Aplicación del Proceso Inmediato cuando el imputado ha sido sorprendido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del Artículo 259.

El delito flagrante en términos generales, es el que se está cometiendo actualmente, y que no vamos más allá de la sorpresa en el acto mismo de cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en forma directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado del lugar (CLARIÁ OLMEDO, pág. 368).

El literal f del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

Asimismo, el artículo 259 del Código Procesal Penal 2004, respecto a la detención en flagrancia indica lo siguiente: La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe cuando:

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

De lo anteriormente mencionado, podemos interpretar que, de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal 2004, podría existir detención en flagrancia desde que el agente es descubierto durante la ejecución del hecho ilícito detenido inmediatamente después de la comisión del delito, con efectos o instrumentos procedentes de la perpetración del mismo.

Al respecto, **SAN MARTÍN CASTRO** (2003), indica que existen tres requisitos para la configuración de la detención en flagrancia, estableciendo los siguientes:

a) **Inmediatez Temporal.** - Este requisito exige que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido antes.

b) **Inmediatez Personal.** – Para la inmediatez personal se requiere que la persona se encuentre en el lugar de los hechos, en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.

- c) **Necesidad Urgente.** – Debido a la necesidad de intervenir urgentemente, no se requerirá una orden judicial previa para detener que se siga ejecutando el hecho punible.

En base a esto resulta correcto sostener que la situación de flagrancia se presenta mientras se está produciendo la comisión de la acción delictiva hasta que el delincuente desaparece del lugar de los hechos, salvo que huyendo sea perseguido inmediatamente, caso en el cual la flagrancia permanece hasta que se lo pierde de vista (RUBIO CORREA, pág. 497).

Ahora bien, el presente decreto legislativo no considera un plazo razonable, más aún los problemas persisten con mucha gravedad en lo que respecta a los supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 259 Código Procesal Penal, pues veremos que –no cumplen– con los requisitos de la flagrancia es estricto sentido, por lo que no pueden llevarse ante un proceso inmediato.

ARAYA VEGA (ARAYA VEGA, 2016), considera que: “los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, no soportan los análisis de constitucionalidad, por cuanto esta misma norma, año atrás el propio Tribunal Constitucional la había declarado inconstitucional” (ARAYA VEGA, pág. 150).

Estos dos últimos supuestos, no cumplen con los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia y doctrina por especialistas en la materia, para así de esta manera pueda considerarse flagrancia propiamente dicha

El supuesto del inciso 3 (cuasi flagrancia) del artículo 259 del Código Procesal Penal, adolece el supuesto de la inmediatez personal, puesto que al presunto sujeto activo ya no está en el lugar de los hechos; si en el supuesto, de que si la persona momentos después de la perpetración del ilícito penal, se le encuentra con objetos relacionados al delito, esto

no justifica la configuración del presupuesto de la inmediatez personal, porque, este presupuesto requiere que el sujeto activo del acto criminal este en el lugar de los hechos perpetrando el delito y con el objeto que utiliza para consumir el delito; y si la norma precisa “(...) ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible (...)”; no corrobora la configuración de dicho presupuesto.

En el supuesto del inciso 4 (flagrancia presunta) del artículo 259 del Código Procesal Penal, adolece de la inmediatez personal, a tal grado, su identificación resulta ser “presunta”, pues no existe flagrancia propiamente dicha.

El Tribunal Constitucional ha establecido la inmediatez personal y temporal, como requisitos indispensables para la configuración de la flagrancia².

Si, por ejemplo, una persona es identificada dentro de las 24 horas, con objetos relacionados al delito como lo señala la norma, usualmente cabe la posibilidad de ser simplemente receptadores o encubridores, ello no siempre implica la suficiencia de elementos de convicción sobre la intervención del sujeto. Por lo tanto, no queda justificada la existencia de dichos presupuestos, la misma que requieren un plazo razonable para la actuación de determinados medios de prueba y solicitar que el caso se adecue a las reglas del proceso común. Por ello estos supuestos no pueden ser llevados ante un proceso inmediato.

En conclusión, los supuestos establecidos en el numeral 3 y 4 del artículo 259 Código Procesal Penal, deben ser modificados, porque el plazo de las 24 horas que establece la

² Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente: 1757 – 2011 – PHC / TC, de fecha 11 de julio del 2011, al señalar: para que se presente la flagrancia es necesaria la presencia de dos requisitos insustituibles: la inmediatez temporal y la inmediatez personal.

incoación del proceso inmediato es insuficiente debido a que necesariamente se tiene que realizar una serie de diligencias preliminares.

Por lo tanto, estos supuestos deben llevarse si o si ante un proceso común, donde se tenga que investigar a gran profundidad, caso contrario afectaríamos principios, como son la actuación objetiva, su independencia e imparcialidad del fiscal³, derecho a la defensa⁴ material y técnica, igualdad de armas⁵, derecho a probar, entre otros.

Es de denotar que el concepto extendido de flagrancia (artículo 259 inciso 3 y 4) se encuentra fuera de la concepción dogmática de la institución y su constitucionalidad puede ser cuestionada.

2.3.3.2. La Aplicación del Proceso Inmediato cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del Artículo 160

Como señala **CAFFERATA NORES JOSÉ** (1998), la confesión es el reconocimiento del imputado, formulado libre y voluntariamente ante la autoridad judicial, acerca de su participación en el hecho en que se funda la pretensión represiva deducida en su contra. (CAFFERATA NORES, pág. 161)

Remitiéndonos al texto del artículo 160 del Código Procesal Penal 2004, deducimos que el fiscal al momento de incoar la aplicación del proceso inmediato por confesión del imputado, deberá presentar los actos de investigación o elementos de prueba que

³ Durante la investigación del delito, antes de la actuación del fiscal, el fiscal deberá actuar imparcialmente. Solo a través de una actuación imparcial podrá el fiscal otorgar al investigado un trato de inocente.

⁴ El derecho a la defensa tiene rango constitucional en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución, que establece que el imputado no puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso.

⁵ Los sujetos procesales deben estar equipados con medios de defensa técnicos en paridad, esto no se cumple si la fiscalía, tiene mayores facultades que el acusado.

corroboran la declaración del imputado, acreditar que no ha existido coacción alguna contra el imputado, sino que se trata de una confesión sincera y espontánea y que se llevó a cabo en presencia del juez o el fiscal y en presencia de su abogado. Después de haber verificado dichos supuestos, el juez podrá declarar la procedente aplicación del proceso inmediato.

2.3.3.3. Se aplicará el proceso inmediato cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio, sean evidentes.

Se da éste supuesto cuando de lo actuado en la investigación se desprende elementos incriminantes suficientes para sustentar una acusación, estamos ante una eventualidad tal que los elementos que se han logrado recolectar pueden fácilmente hacer llegar la causa hasta el juicio oral siendo innecesario seguir con las investigaciones.

Entonces, este supuesto se cumplirá cuando el fiscal, luego de haber agotado los actos de investigación urgentes e inaplazables llevados a cabo antes de culminado el plazo de investigación preliminar o dentro de los 30 días de la investigación preparatoria, haya acopiado evidencia suficiente y necesaria que acredite la relevancia penal del hecho investigado y su calificación como delito, así como haya identificado debidamente al autor y pueda atribuirle responsabilidad penal, pese a no encontrarse en los supuestos de flagrancia o confesión, o pese a tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

2.3.3.4. Incoación del Proceso Inmediato en los casos de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción

Dentro de la incoación del proceso inmediato también se contempla en casos de delitos de nombre propio como son los delitos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción (delitos contemplados en los artículos 149 al 150 y 274 del Código Penal), en los que se excluyen los presupuestos de flagrancia, confesión y evidencia delictiva (artículo 446 inciso 4 del Código Procesal Penal del 2004).

En teoría desde la propia configuración tales como delitos (salvo el caso del artículo 150 del Código Penal), se tiene que se trata de ilícitos penales, el primero, de evidencia delictiva (esto por la resolución judicial proveniente del proceso civil de alimentos, que es un elemento de tipo objetivo); y, el segundo, de flagrancia, pues la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad consta con la pericia toxicológica o de alcoholemia (dosaje etílico), realizada inmediatamente luego de la intervención del imputado.

Al respecto, debemos aclarar que el Decreto Legislativo 1194, legitimado en la Ley 30336 – Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

En este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha con la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

El ejecutivo al modificar el proceso de omisión de asistencia familiar (vía decreto legislativo) ha excedido el marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo, pues, dichas facultades nunca fueron otorgadas para regular el delito de omisión de asistencia familiar, que poco o nada tiene que ver con la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El delito de omisión de asistencia familiar: “(...) no es materia de seguridad ciudadana (...), (...) el delito de omisión es un problema social, económico y cultural, que se da sobre todo en los sectores sociales marginales. La respuesta constitucional a este problema social no es la pena privativa de libertad como remedio jurídico” (BALAZAR PAZ, pág. 58).

2.4. SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO

El artículo 446 inciso 1, obliga al ente persecutor solicitar la incoación del proceso inmediato antes supuestos de flagrancia, confesión o evidentes elementos de convicción. Sin embargo, conforme al inciso 2 del citado artículo, quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.

Por ende, ante ésta situación, el fiscal, para incoar la improcedencia del proceso inmediato debe expresar los supuestos de complejidad previstos en el numeral 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal.

Dicho artículo señala expresamente que corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demande la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesite realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucre llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revise la gestión de personas jurídicas o entidades del estado; h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de esta.

Asimismo, se tiene que otro objetivo de improcedencia del proceso inmediato está referido a los casos en los que se trate de varios imputados implicados en delitos diferentes, pues, tal como lo prevé el inciso 3 del artículo 446 del Código Procesal Penal, sólo será procedente el proceso inmediato cuando se trate de una investigación seguida contra varios imputados, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos de flagrancia, confesión o evidencia suficiente y sean investigados por el mismo delito.

2.5. LA AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

Los alcances de la modificatoria al proceso inmediato, también alcanzaron al aspecto procedimental dentro de los juzgados, siendo que el artículo 447 del Código Procesal Penal, establece que al término del plazo de detención policial establecido en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato.

El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza audiencia de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato, la detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia.

Dentro de este contexto, el detenido en flagrancia continuará detenido hasta la realización de la audiencia, la cual se realizará máximo a la cuarenta y ocho (48) horas del requerimiento de incoación que vaya a formular el fiscal, lo que implica que el detenido en flagrancia pese a que no exista un requerimiento de prisión preventiva en su contra, deberá estar detenido hasta que se lleve a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato.

Al respecto, debemos precisar que la norma regula expresamente que, dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si

requiere la imposición de alguna medida coercitiva que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato.

El requerimiento de incoación debe contener en lo pertinente los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal. En esa perspectiva, el inciso 4 del artículo 447 del Código Procesal Penal, señala que, el juez frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden: a) sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; b) sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada solicitado por las partes; c) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal.

El auto que resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser pronunciado, de modo impostergable en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.

Una vez, pronunciada la decisión que dispone la incoación del procedimiento, el fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día lo remite al juez penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, esto con arreglo a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 448 del Código Procesal Penal.

Por otro lado, frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal deberá dar trámite a la investigación conforme al proceso común respectivo.

2.6. LA AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO

Una vez recibido el expediente fiscal con la acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la audiencia única, plazo que no debe exceder de las setenta y dos (72) horas.

Debemos precisar que los plazos tan cortos resultan siendo muy peligrosos ya que su cumplimiento está sujeto al calendario de audiencias de los órganos jurisdiccionales, siendo de recordar que un presupuesto de la eficacia de la oralidad es que existan el número suficiente de jueces para acometer con prontitud las tareas de juzgamiento.

Acto seguido, luego de afirmar, conforme al principio de aceleramiento procesal que rige ese proceso especial, que la audiencia es siempre pública y sobre todo inaplazable y en atención al principio de colaboración de las partes respecto a los órganos de prueba, que la responsabilidad de su concurrencia recae en ellas (no en órgano jurisdiccional, que desde esta norma no tiene injerencia alguna en la citación y convocatoria de aquellos), se instala la audiencia, destina en este primer periodo a examinar si la acusación presenta defectos formales (que deberán ser subsanadas en ese mismo acto), y luego a definir todas las peticiones que las partes puedan formular conforme a lo dispuesto en inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, las cuales, previo debate oral, serán resueltas oralmente por el juez penal. La norma a su vez encarga al juez plantear la posibilidad de que planteen convenciones probatorias (SAN MARTÍN CASTRO, pág. 815).

Cumplido el trámite de contradicción, esto es, de planteamiento y debate de las mociones de las partes (planteamiento de pruebas, objeciones a la reparación civil, exclusiones probatorias, deducción de excepciones, cuestiones de competencia y otros), el juez penal debe resolverlas mediante resolución oral y en consecuencia siempre oralmente emitir algunos autos de enjuiciamiento y de citación a juicio oral.

El segundo periodo y final del proceso inmediato, es propiamente, el juicio inmediato, el auto de citación a juicio oral señalará, obligatoriamente, en la misma fecha y hora, la realización del acto oral.

2.7. CONSECUENCIAS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194

La reforma de proceso inmediato, mediante el Decreto Legislativo 1194, pretende que el inculpado sea inmediatamente procesado y sancionado sin mediar alguno la existencia de sus garantías y derechos constitucionales, así como también los principios que garantizan el derecho a la defensa del procesado.

ARAYA VEGA (2016), sostiene que: Hay que tener mucho cuidado, ya que el objetivo no puede ser más cárcel, más rápido, para más personas; sino tenemos que asegurar un sistema procesal penal especial, orientado a que las personas que verdaderamente deban ser sancionados lo sean, y las personas que proclaman inocencia, sean sometidas ante un proceso común, más no ante un proceso especial (ARAYA VEGA, pág. 71).

2.8. EL FISCAL PIERDE LA AUTONOMÍA DE INVESTIGAR

En el Decreto Legislativo 1194, las palabras claves a analizar son “debe” y “bajo responsabilidad”, es decir, el Poder Ejecutivo vía facultades delegadas dice al representante del Ministerio Público lo que “debe hacer”, como si fuera su superior y esto se ve agravada más aun apercibiéndolo “bajo responsabilidad”; es decir, no le importan que el Ministerio Público sea una institución constitucionalmente autónoma formada por profesionales de derecho, (...), no le importa al ejecutivo, sino que, si más, el redactor del decreto, sin evaluar cada caso en particular, se quiere imponer por la vis compulsiva con el “debe”, y “bajo responsabilidad”, para obligar al fiscal a incoar el requerimiento del proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria” (BALAZAR PAZ, pág. 41).

Con este cambio se afecta la discrecionalidad del fiscal. Cuestión que es ciertamente discutible, pues en la práctica quien califica la flagrancia es el fiscal y si dicha autoridad considera que los hechos no configuran flagrancia, no está obligado a requerir el proceso inmediato. Si existiendo flagrancia, el fiscal no cuenta con los elementos de prueba materiales inmediatos para sustentar su pedido ante el juez, deberá seguir con el proceso común.

Si nos ponemos en situación del fiscal, una vez que hayamos tenido conocimiento de un supuesto delito flagrante, es precisamente realizar un control de legalidad de los actos realizados por la Policía Nacional del Perú, para así de esta manera calificar si la flagrancia cumple con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia y doctrina, o caso contrario descartar la situación de la flagrancia.

Si en el caso que cumpliera con todos los presupuestos que configura la flagrancia, tendríamos que pasar a la siguiente etapa, que la recolección de evidencias e indicios que configuran como elementos de convicción que sustenten con certeza la configuración de la flagrancia, el delito y la vinculación de sujeto con el delito.

En ese trajín de calificación, recolección y elaboración del requerimiento, difícilmente dentro de las 24 horas, lo que implica, que como fiscal estoy destinado a recaudar elementos de convicción solamente de cargo para acreditar el delito (hechos constitutivos) ¿y los hechos impedidos de la faz negativa del delito?, queda olvidado, en ese entender se afecta la autonomía del Ministerio Público, lo que conlleva a no actuar objetivamente y racionalmente por lo contrario su actuación no está sometido a la

Constitución⁶, y en segundo lugar transgrede el derecho a la defensa eficaz, en consecuencia esta se da porque el presente proceso inmediato reformado no presenta un plazo razonable.

Antes del presente decreto legislativo, para el fiscal era discrecional, incoar el proceso inmediato, a tal medida que le daba un momento de análisis y criterios concernientes a la investigación, sin embargo, bajo el nuevo régimen, el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato, lo cual esto transgrede la “autonomía”⁷ del Ministerio Público⁸, esto implica que no actúe de manera objetiva.

⁶ La Constitución ha asignado el Ministerio Público una serie de funciones constitucionales (...), es de un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.

⁷ Artículo 158 de la Constitución: “El Ministerio Público es autónomo. (...)”; asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: “Artículo 1: El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, (...)”.

⁸ Artículo 60 del Código Procesal Penal: “El Ministerio Público es titular de acción penal. (...)”; asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ministerio Público establece que: “los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles sus superiores”.

CAPITULO III

EL DERECHO DE DEFENSA Y LA CARGA PROCESAL

3.1. EL DERECHO DE DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El artículo 139 inciso 14 de la Constitución consagra para la persona humana: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Enseguida agrega que: “toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención (cláusula repetida en el inciso 15). Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.

El primer extremo de la citada norma constitucional extiende la protección a cualquier procedimiento -no solo penal- y, como tal, es reconocida como requisito esencial para la válida constitución de un proceso. En cuanto al proceso penal, Julio Maier (1996), precisa que este derecho no sólo está en relación a la protección del imputado, sino que también alcanza a otras personas que pueden intervenir en él, tales como el actor civil o el tercero. Se trata de defender un derecho o interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea porque se pretende algo o porque, al contrario, nos oponemos a esa pretensión, requiriendo que ella no prospere. El Ministerio Público, desde esta perspectiva de la defensa como limitación al poder estatal, no tiene derecho de defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria (págs. 543 - 544)

El segundo extremo de la norma constitucional está referido al derecho de defensa en el proceso penal y, concretamente, al imputado. Gimeno Sendra (GIMENO SENDRA,

1988) define al derecho de defensa como: “El derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le puede atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano” (pág. 89).

El derecho de toda persona nace, según el texto constitucional, desde que es citada o detenida por la autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación del imputado, no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le vincule con la comisión de un delito. Existiendo una imputación nace el derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación tiene, en cuanto posibilidad procesal, el derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva.

Señala San Martín Castro (2012), que: el derecho de defensa representa la piedra angular del proceso, ya sea penal, civil, administrativo, etc., siendo requisito sine qua non para la válida constitución de un proceso (pág. 119).

Para Sánchez Velarde (2012), sostiene que: el derecho de defensa en el proceso penal se constituye como un derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y lo largo del proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación existente. Constituye un pilar fundamental en el sistema procesal penal de corte acusatorio adversarial, en el que

se reconoce al imputado el derecho de contradecir, de desvirtuar lo alegado en su contra, desde el inicio de las investigaciones hasta la culminación del proceso penal obligatoriamente asistido por su abogado (pág. 306).

Armonizando con el texto constitucional, el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004, establece que: "... toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comuniquen de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad". Sin duda que esta declaración viene a superar todas las restricciones generadas por el proceso inquisitivo, en donde incluso, aún se aprecian rezagos como el de ocultar la imputación al procesado hasta después que preste declaración.

Otro aspecto fundamental que encontramos en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004, sobre el derecho de defensa, es que: "Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Respecto al ejercicio de la defensa en plena igualdad al ataque imputativo y actividad probatoria del Ministerio Público, sin lugar a dudas que ello constituye una exigencia ineludible del modelo acusatorio, a fin de que el encausado pueda competir en condiciones con un Ministerio Público fortalecido en el modelo. Así lo consagra el inciso 3 del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004, al prescribir que las

partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades (igualdad de armas) de ejercer facultades y derechos previstos en la Constitución.

El Código recoge una perspectiva amplia del derecho de defensa, pues todas las partes del proceso penal, sean imputados o no, tienen la garantía constitucional de defensa.

Es respecto de la persona perseguida que el derecho constitucional a la defensa presenta su mayor capacidad de rendimiento e importancia, pues si bien los distintos sujetos procesales en un proceso civil se enfrentan entre sí, con sus propios medios, en el proceso penal, el imputado se enfrenta al Estado y toda su maquinaria persecución. Es en esta razón que en la doctrina se ha privilegiado la explicación del derecho de defensa a la defensa en sede penal, en su variante dirigida al imputado.

Por eso es que Gimeno Sendra citado por Urtecho Benites (2014), entiende el derecho de defensa como la garantía fundamental que le asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad que asiste condenado, se presume inocente. Agregando dicho autor que la defensa constituye un auténtico derecho fundamental, y asimismo que el derecho fundamental de defensa comprende una vasta gama de otros derechos del imputado, ya que como el mismo dice: “El derecho fundamental de defensa se integra con todo un catálogo de derechos también fundamentales de carácter instrumental” (pág. 149).

Para el funcionamiento de esta garantía no es necesario, siquiera, que se haya instaurado un proceso penal formal, es decir, funciona ya con la mera imputación de la comisión de un ilícito criminal por parte de alguna de las autoridades encargadas de la persecución penal. El derecho de defensa ampara al imputado desde el momento de la primera presunción (material) policial o administrativa de su participación en el evento criminal hasta la definitiva resolución jurídica del conflicto criminal. Es este sentido, lo acompaña tanto en sede de investigación preliminar policial, como en los momentos que le corresponden al Ministerio Público, el Juez especializado en lo Penal y las Salas Penales (Superior y Suprema) que intervengan en el caso.

3.2.LA DEFENSA PENAL

Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses en juego.

En general, la defensa es un derecho subjetivo concedido por la ley a todos los habitantes de una nación, fundado en el principio de libertad individual, no solamente en cuanto sea esa libertad atacada de hecho, sino en cuanto significa la valoración subjetiva indispensable de quien por cualquier causa sea puesto en la necesidad de soportar un procedimiento judicial. “Es un poder de impedir, resistir y prevenir cualquier restricción injusta a la libertad individual, y al pleno ejercicio de los derechos que las personas tienen otorgadas por imperio del orden jurídico pleno” (CLARIÁ OLMEDO, pág. 307).

El derecho de defensa es el poder que cualquier persona tiene para resistir la persecución penal, acreditando su inocencia o las circunstancias que atenúen su responsabilidad. “El

derecho de defensa –dice Vélez Mariconde– es el derecho de alegar y probar la inocencia, pero en ella va implícita la posibilidad de propugnar una valuación más benigna que la contenida en el requerimiento acusatorio o cualquier circunstancia favorable” (RIQUELME, pág. 225).

El derecho de defensa, consiste en aquel derecho que otorga al sujeto pasivo, la posibilidad de conocer en forma precisa la imputación de la que es objeto, el derecho a manifestar frente a esa imputación penal sus propias opiniones y demostrar, a recabar sus propios elementos de hecho y de derecho que viene a constituir sus propias razones y argumentos.

Este derecho se manifiesta desde el inicio de cualquier investigación, es decir, desde que a cualquier persona se le imputa o incrimina la comisión de un ilícito penal. Debemos aclarar, que para el funcionamiento de esta garantía (derecho de defensa) no es necesario, siquiera, que haya instaurado un proceso penal formal, es decir, que se haya dictado un auto de apertura de instrucción, funciona ya con la mera imputación de la comisión de un ilícito criminal por parte de alguna de las autoridades encargadas de la persecución penal. Como refiere San Martín Castro (2003), el derecho de defensa de toda persona nace, según el texto constitucional, desde que es citada o detenida por la autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación del imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le vincule con la comisión de un delito (SAN MARTÍN CASTRO, pág. 70).

El derecho a la defensa es un derecho fundamental de naturaleza procesal, concibiéndola de dos maneras: como principio de contradicción para afrontar cualquier indefensión; y

como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. Por ello, se afecta el derecho de defensa cuando, al interior de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses (SALINAS SICCHA, pág. 424).

La defensa penal, consiste, pues, en la resistencia a la pretensión punitiva del Estado ante la amenaza que la actividad persecutoria significa para la libertad, y tiende a destruir o reducir esa amenaza mediante afirmación y acreditación de inocencia o de una menor responsabilidad o de cualquier circunstancia favorable. Además de este contenido sustancial, la defensa penal se aplica a la regular marcha del proceso, para obtener una sentencia a través de un trámite legal, oponiéndose a la irregularidad procesal o a la ilegalidad de su iniciación o de su continuación (excepciones). Para el imputado, la defensa se ejercita desde el comienzo del procedimiento, vale decir, desde que existe una imputación en su contra, hasta la finalización de él, y aún la etapa ejecutiva cuando ya es condenado.

La actividad de defensa penal permite la efectiva vigencia del contradictorio dentro del proceso. Favoreciendo la igualdad procesal entre los oponentes; permite el ingreso al proceso de elementos probatorios y técnicos de descargo, como ingredientes necesarios para una más justa aplicación del derecho sustancial.

Por lo que en palabras de Gómez Colomer (2008), “el principal derecho del acusado es el de defensa, correlativo a la acusación, como la concreción del principio de contradicción,

tano en su vertiente material, como técnica a cargo del defensor. El cambio del sistema inquisitivo al acusatorio se nota de manera especialmente incisiva en este derecho, pues en verdad en un proceso inquisitivo el acusado no tiene prácticamente derecho a nada, tampoco a defenderse, aunque de manera formal aparezca este derecho consagrado en la ley, ya que, la acusación se teje de manera secreta en su contra, no teniendo obligación las autoridades públicas de persecución de recoger las pruebas exculpatorias, cercenando además, las posibilidades de actuación real del defensor” (GOMÉZ COLOMER, pág. 204).

Entonces, podemos decir que el derecho de defensa junto con el contradictorio o contradicción es esencialmente la manifestación técnica en el proceso de la garantía constitucional y legal de la defensa, ya que, es a través del contradictorio donde se logra la fórmula mediante la cual se articula técnicamente en el proceso, el derecho fundamental a la defensa.

Algunos autores consideran que el concepto de defensa penal es generalmente opuesto a la acusación y defensa –dicen–, no puede existir la una sin la otra, encontrándose ambas en situación de igualdad: “La formulación del juicio penal sigue el orden de la triada (tesis, antítesis y síntesis), el juicio es síntesis de acusación y defensa” (CARNELUTTI, pág. 232).

3.2.1. DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA TÉCNICA

La defensa, es el derecho indispensable para la existencia del sistema acusatorio; consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Por tanto, está íntimamente ligado

a la garantía de contradicción y a la igualdad de armas en el proceso; es la facultad de las partes de sostener sus posiciones y contradecir los fundamentos del contrario (CUBAS VILLANUEVA, pág. 49).

La defensa, en tanto derecho fundamental, es ejercitada tanto por el imputado cuanto, por el abogado defensor, así lo corrobora expresamente el inciso 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal 2004, de ahí su carácter dual: privada o material y pública o formal, esta última informada por el derecho público y de carácter obligatorio. La defensa material comprende el derecho del imputado a hacer valer su propia defensa, ya sea contestando la imputación, negándola, guardando silencio, o bien conformándose con la pretensión fiscal. En esta perspectiva, la defensa técnica se erige como un servicio público imprescindible que se presta aún contra la voluntad del imputado y viene a completar o complementar la capacidad del imputado para estar en juicio penal, con lo que se busca garantizar el principio de igualdad de armas y resistir eficazmente la persecución penal (MAIER, pág. 551).

Entonces, el derecho de defensa implica la posibilidad del imputado (que es él que hace uso de ella en el proceso penal) de participar en el proceso penal por medio propio – autodefensa– o mediante el uso de la defensa técnica para contrarrestar los ataques del sujeto activo del proceso; es decir, contar con un abogado defensor desde el inicio mismo de las investigaciones.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “El ejercicio del derecho de defensa, es de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo

instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, lo que supone el derecho a una defensa técnica esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia”⁹.

Si bien, el imputado es un sujeto pasivo porque no tiene la carga de la prueba; la aplicación del derecho de defensa lo convierte en un sujeto activo en calidad de sujeto procesal pasivo. Es decir, es pasivo en tanto que el fiscal es quien debe probar la culpabilidad del imputado y no él mismo quien debe probar su inocencia; y es activo en el sentido que puede participar en el proceso sin restricción alguna mediante la autodefensa o la defensa técnica.

3.2.1.1. DEFENSA MATERIAL

La defensa material también llamada privada, explica la reacción natural de un inculpado de hacer su propia defensa, ya sea contestando la imputación, negándola o guardando silencio o bien aceptando la acusación fiscal.

El derecho de defensa material incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal. El de contradicción, de carácter estructural al igual que la igualdad, y el acusatorio, vinculado al objeto del proceso al igual que los de legalidad – oportunidad.

⁹ Sentencia recaída en el Expediente: 1323 – 2002 – HC / TC, de fecha 9 de julio del 2002.

De lo que se tiene que la defensa penal puede manifestarse y de hecho se manifiesta por el dicho directo del imputado, sin consideración a sus conocimientos jurídicos, lo que se ha dado a llamar DEFENSA MATERIAL, y normalmente se muestra en la contestación a la imputación al rendir su instructiva, o al absolver el interrogatorio en el juicio oral.

La defensa material se realiza cuando el imputado de delito, por propia iniciativa o por interrogatorio de la autoridad judicial o policial, da explicaciones sobre los hechos que se le atribuyen. Explicaciones que son espontáneas, instintivas, que es factible que se den en cualquier momento del proceso, pero que aparecen primordialmente en la indagatoria, cuando es preguntado como sospechoso de haber cometido un delito. Dicho acto es estimado como un derecho de defensa y está rodeado de una serie de garantías cuyo objetivo es asegurar efectivamente la defensa.

El proceso penal moderno no tiene como objetivo ni puede basarse en la idea de la colaboración del imputado de modo espontáneo o bajo coacción para obtener una condena, sino que la confesión sincera del imputado necesita de otros medios o evidencias corroborantes y ante todo debe respetarse la calidad de sujeto procesal de imputado, y su condición de titular del derecho de defensa.

La defensa material también denominada autodefensa, consiste en la intervención del imputado en el proceso realizando actividades encaminadas a preservar sus derechos: lograr su libertad o impedir la condena u obtener la mínima sanción posible.

En tal sentido, la defensa material constituye una autodefensa, que responde a una incoercible manifestación del instinto de libertad del hombre y no está sujeta a vínculos

jurídicos – morales. “Existen preceptos muy antiguos, aún en vigencia, que dan la medida exacta de esta amplitud: nadie está obligado a delatarse, nadie está obligado a causar su propio daño, el acusado no está obligado a jurar que va a decir la verdad, lo que equivale a autorizarlo a mentir en defensa propia” (GARCÍA RADA, pág. 457).

Andrés de la Oliva Santos (2003), sostiene que: “La defensa material o amplia: es una función en la que participan todas las autoridades y funcionarios que intervienen en el proceso penal y consiste en consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al imputado, así como instruirle en sus derechos y recursos, en tanto no esté asistido por su letrado” (pág. 869).

Asimismo, Sánchez Velarde (1994), nos manifiesta que: “El titular del derecho interviene directa y personalmente tratando de evitar una resolución adversa. La legislación procesal se manifiesta abiertamente por esta forma de defensa, aunque predomina la intervención del letrado” (pág. 109).

3.2.1.2. DEFENSA TÉCNICA

La defensa técnica también llamada pública o formal debido a su naturaleza obligatoria y jurídica, cuya tecnicidad es comprensible porque desde el punto de vista de servicio público es imprescindible aún contra la voluntad del investigado – procesado para cumplir con las exigencias de equilibrio y justicia de un proceso penal, es decir, para garantizar el desarrollo de los principios procesales penales.

La defensa penal también se manifiesta por obra del defensor en su función de asistencia del imputado, lo que se conoce por DEFENSA TÉCNICA O FORMAL, y se traduce en instancias, oposiciones, planteamientos de excepciones y, principalmente, en la discusión.

La defensa técnica, “se ejerce mediante instancias, alegatos, observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. Exige, lógicamente, conocimientos jurídicos de los que el imputado, en la mayoría de los casos, carece; sin ellos no se podría defender eficazmente, y la defensa, por ende, no respondería a los fines de su institución” (RIQUELME, pág. 228). En este amplio ámbito procede el defensor por vía de deducciones o negaciones; niega la existencia del hecho que motiva la causa; o niega que el imputado tuviera participación criminal; o sostiene que tal hecho no constituye delito o constituye uno menos grave del que le atribuye acusación; o propugna la admisión de una causa de imputabilidad, de justificación, o de excusa; o simplemente pretende hacer valer una circunstancia cualquiera de atenuación. Por distintos caminos demanda una sentencia que declare sin fundamento la pretensión punitiva ejercida, o una más benigna a la solicitada por el acusador. Su análisis penetra en los hechos y alguna vez se detiene en ellos, pero en la mayor parte de los casos incide en el derecho” (RIQUELME, pág. 228).

En la defensa técnica, según vemos, entre el Juez –que ejerce la función jurisdiccional– y el imputado –a quien se atribuye haber cometido una infracción legal– existe una tercera persona: el defensor. Carnelutti (1950), dice que: “el defensor viene a ser un intercesor, porque su misión es evitar o mitigar la sanción. El inculcado está por lo general, privado de la energía y capacidad necesaria para expresar sus razones, tanto por la ignorancia cuanto por la natural situación psicológica que produce una imputación. Cuanto más

avance la ciencia penal, más necesaria será la participación de un tercero técnico que, con su intervención, pone en pie de igualdad la acusación –llevada a cabo por un experto en derecho– con la defensa que deberá reunir igual capacidad” (pág. 233).

La defensa técnica es la jurídica y razonada y dado el interés de justicia, aparece como obligatoria en el proceso penal y es presupuesto indispensable para dictar sentencia, cuando se ha producido acusación. Tanto es así que, si el imputado de delito no ha designado defensor de confianza, se le provee de un defensor oficial, funcionario del Estado llamado tradicionalmente defensor de pobres y ausentes, y actualmente según norma especial, abogado de oficio o defensor público, quien interviene cuando el imputado no ha designado defensor de su libre elección, o éste es sustituido por no haber concurrido injustificadamente a la audiencia¹⁰.

La defensa técnica se manifiesta en un sentido sustancial y en sentido procesal. Por la primera, que es la contestación a la acusación, se resiste el fundamento de la pretensión penal. Aquí, la actividad de defensa se manifiesta frente a la jurisdicción, como la contrapartida de la imputación. Contiene afirmaciones, acreditaciones y razonamientos que tienden a destruir el fundamento de la pretensión incriminatoria para mantener incólume la inocencia o atenuar la responsabilidad. Por la segunda, se resiste el progreso

¹⁰ El inciso 1 del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, referido al derecho de defensa, nos menciona que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a (...) ser asistido por un Abogado Defensor de su elección, o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala”.

de la imputación por entenderse impedido un pronunciamiento sobre el fondo o ante la irregularidad del desenvolvimiento procesal. Esta segunda manifestación incide en la vida misma del proceso, a través de planteamiento de nulidades u oposiciones y excepciones o de una cuestión prejudicial. El planteamiento de las excepciones y de la cuestión prejudicial es, pues, una manifestación técnica de defensa. El defensor las interpone en el proceso como medios de defensa, precisamente para provocar la muerte o la paralización del proceso penal.

La paridad de la acusación y de la defensa demuestra la necesidad, para el éxito de la función punitiva, no solo de la acción, doble y contraria, del Ministerio Público y del defensor, sino del equilibrio entre ellos, en el sentido de que estén dotados de los mismos poderes en el desenvolvimiento del proceso. Este es un principio fundamental del proceso penal.

Julio Maier (1999), al respecto manifiesta que: “Una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fondo, de la sentencia” (pág. 583).

Por su parte, Sánchez Velarde (1994), menciona que: “Es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la correcta viabilidad del proceso. Aun cuando el imputado puede hacer uso de la autodefensa, resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado defensor en el curso del procedimiento” (pág. 110).

Cuando la defensa técnica no se cumple o se produce deficientemente, por negligencia o desgano del defensor, o cuando el imputado no ejerce la defensa material, se crea una verdadera situación de INDEFENSIÓN. En este caso, el principio de contradicción o contradictorio y el de igualdad de las partes dentro del proceso, no se cumplen, con perjuicio evidente del imputado.

3.2.2. OBLIGATORIEDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA

El derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe; con cierto simplismo, que en este tema no es recomendable sino tan sólo para lograr una aproximación a él, esas actividades pueden sintetizarse en: la facultad de ser oído, al de controlar la prueba de cargo que podría utilizarse válidamente en la sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder estatal.

Empero, a más de la defensa material, la particularidad del procedimiento penal reside en la obligatoriedad de la defensa técnica (conceptúese ésta como la asistencia jurídica que un jurista graduado brinda al imputado y su intervención, casi siempre autónoma, durante el procedimiento, procurando a favor del imputado). Se integra la defensa del imputado tornando necesario, por regla, que él sea asistido jurídicamente. Ello se logra sin desconocer el derecho esencial del imputado de elegir un jurista que lo asesore y defienda

(facultad de elección) desde el primer momento del procedimiento seguido en su contra. No obstante, para el caso de que el imputado no pueda designar su defensor, por su falta de recursos o por cualquier otra razón, el Estado acude en su auxilio, permitiéndole designar al defensor oficial. Más aún, aunque el imputado no designe ningún defensor; el tribunal nombra directamente al defensor oficial llegado el momento en el cual el debido respeto a la inviolabilidad de la defensa no tolera la ausencia de un defensor al lado del imputado, “en la primera oportunidad, pero en todo caso antes de la declaración del imputado”. La única excepción está representada por el derecho a defenderse por sí mismo, derecho que todos los códigos procesales penales autorizan, aun cuando no de manera absoluta.

Lo fundamental de esta variante del derecho de defensa ha llevado a que se requiera – para salvaguardar su efectividad– que el Estado asuma la obligación de dotar de un defensor de oficio a los sujetos que no se encuentre en condiciones de asumir el pago del profesional que se habrá de ocupar de su defensa técnica. Se ha denominado a este supuesto: derecho a contar con un abogado de oficio.

Previsiones tan exhaustivas y detalladas sobre la necesidad de la defensa técnica, al punto de considerarla un servicio público imprescindible, que se presta aun contra la voluntad del imputado, sólo puede indicar que el derecho procesal penal, de alguna manera muy particular, no considera al imputado suficientemente capaz para resistir la persecución penal –estatal, pero también la privada– por sí solo, salvo casos excepcionales; esto es, admite que no posee la plena capacidad para estar o intervenir en el procedimiento penal por sí mismo, con excepción del caso en el que se permite su autodefensa técnica. El defensor viene, así, a completar o complementar la capacidad del imputado para estar en

juicio penal y esa es la auténtica función que él cumple. Se comprenderá mejor esta misión y la relativa capacidad del imputado para estar en un juicio penal, si se observa que, salvo excepciones, ambos poseen facultades autónomas, esto es, independientes, que no se inhiben entre sí o mutuamente por el ejercicio concreto de ellas en un sentido determinado: por ejemplo, si el imputado decide confesar el hecho punible como propio y el defensor lo niega, o el defensor acepta que el imputado ejecutó el hecho punible, incorporando la circunstancia de que se defendió de una agresión de la víctima, y el imputado niega haber participado en el hecho punible.

En consecuencia, los defensores públicos deben prestar el servicio gratuito sin mayores condiciones previas. Sin embargo, como el servicio de la defensa pública se presta a favor de las personas de escasos recursos económicos, entonces pierde el beneficio de la gratuidad del servicio¹¹, por lo que debe pagar el arancel correspondiente.

3.3.LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE LA DEFENSA CON EL ACUSADOR

Las leyes peruanas reconocen que el defensor puede intervenir en plena igualdad de armas en la actividad probatoria y, por ende, tiene derecho aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.

Esta garantía, deriva genéricamente de la Constitución, condiciona estructuralmente el proceso, conjuntamente con el proceso de contradicción. Una contradicción efectiva en el proceso y la configuración de parte que se da a los sujetos del proceso, exige desde la

¹¹ Otras causales de pérdida de beneficio de gratuidad según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 29360 – Ley del Servicio de Defensa Pública son: i) el beneficiario incurre en falsedad de la información proporcionada sobre su situación socioeconómica, ii) desaparecen las causas socioeconómicas que dieron origen al beneficio y iii) el usuario contrata o recibe el servicio de un defensor privado.

ley fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en igualdad de condiciones; es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada uno estime conveniente¹² (DE LA OLIVA SANTOS, ARAGONESES MARTÍNEZ, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA, & TOMÉ GARCÍA, pág. 32).

Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes procesales gocen de los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión.

Dicha norma no distingue entre ley material y ley procesal, por lo que es una proyección del genérico de igualdad con el derecho al debido proceso, el cual hay que estimarlo vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna, o bien cuando el legislador o el propio órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria o la gravan indebidamente con cargos procesales exorbitantes, sin que ambas posibilidades y cargas procesales alcance justificación objetiva y razonables alguna (GIMENO SENDRA, MORENO CATENA, & CORTÉS DOMÍNGUEZ, pág. 81).

En consecuencia, si se concibe al juicio como la necesaria síntesis de acusación y defensa, no es lógicamente posible pensar a la una sin la otra; esto lleva a destacar, por razones de

¹² Así lo consagra el inciso 3 del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derecho previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.

elemental lógica y de debida legalidad, que la defensa, en cuanto concepto contrario a la acción, es de igual rango y necesidad que ésta.

De ahí entonces que esta igualdad –de muy importantes consecuencias– deba concebirse como uno de los principios básicos de la mecánica del proceso penal.

Al igual que la acción, la defensa es una propuesta de decisión también en forma similar a la acusación, es una investigación de circunstancias de hecho y valoración de pruebas y exposición razonada y fundada del derecho aplicable a las circunstancias fácticas del caso.

Como dice Canelutti, si la acusación es, por tanto, el desarrollo racional de la pretensión penal, la defensa es su razonada contestación, destacándose el concepto de contestación como opuesto a interrelacionado al de pretensión; contestación de la pretensión es la exigencia del no castigo imputado.

Si se piensa la acción como un derecho a la tutela jurídica, la defensa también puede ser entendida, desde la perspectiva contraria, como similar derecho a esa tutela.

3.4. EL PODER DEL ESTADO

El Estado por medio de órganos públicos preestablecidos es quien, por regla, persigue penalmente. Igualar el poder de esta organización estatal, puesta al servicio de la persecución penal, resulta imposible, el Ministerio Público y la Policía ejercen el poder del Estado y, por ello, disponen de medios que, salvo excepciones históricas, meramente prácticas, debidas al ejemplo escasamente edificante de organizaciones delictiva privadas, son, jurídicamente imposibles de equiparar. Ello se traduce, ya en la persecución penal concreta e individual, en una desigualdad real entre quien acusa y quien soporta la

persecución penal. Se trata así de un ideal de intentar acercarse en la mayor medida posible al proceso de las partes, dotando al imputado de facultades equivalentes a las de los órganos de persecución del Estado y del auxilio procesal necesario para que pueda resistir la persecución penal, con posibilidades del imputado respecto de aquellas que poseen los órganos de persecución penal del Estado en el proceso penal.

Dado que la instrucción es el período procesal cuya tarea principal consiste en averiguar los rastros que existen acerca de un hecho punible que se afirmó como sucedido, con el fin de lograr la decisión acerca de si se promueve el juicio penal o si se clausura la persecución penal del Estado, resulta que, en él, los órganos de persecución penal del Estado prevalecen sobre el imputado, sin perjuicio del resguardo de las garantías individuales que amparan a este último, las cuales suponen un mínimo de derechos correspondientes a él, sin los cuales no se podría afirmar con seriedad el funcionamiento de un Estado de Derecho. El procedimiento de construcción de la verdad procesal es, durante la instrucción preliminar, un procedimiento básicamente autoritario, cualquiera que sea la autoridad que lo presida o dirige: no sólo es una autoridad estatal la que reconstruye el proceso histórico que conforma su objeto, en principio sin ingreso al procedimiento de los diversos intereses y punto de vista inmiscuidos en el caso (sin debate), sino que, además, el procedimiento así cumplido obedece al fin principal de recolectar información para lograr la decisión del Estado acerca del enjuiciamiento de una persona.

Concluida la instrucción, en cambio, aparece en toda su magnitud el ideal de otorgar posibilidades parejas al acusado respecto de su acusador. El juicio o procedimiento principal es, idealmente, el momento o periodo procesal en el cual el acusador y el

acusado se enfrentan, a la manera del proceso de partes, en presencia de un equilibrio procesal manifiesto. Tanto es así que las facultades que son otorgadas a uno y otro son paralelas o, si se quiere, las otorgadas a uno resultan ser reflejo de las concedidas al otro: la acusación provoca la contestación del acusado; ambos pueden probar los extremos que invocan y controlar la prueba del contrario; ambos valoran la prueba recibida para indicar al tribunal el sentido en el que debe ejercer su poder de decisión. En su conformación ideal este procedimiento construye la verdad procesal por enfrentamiento de los diversos intereses y puntos de vista acerca del suceso histórico que constituye su objeto, mediante un debate en el cual se produce ese enfrentamiento, cuya síntesis está representada por la decisión de un tribunal tan imparcial como sea posible.

Quizás el primer indicio sobre la tendencia del sistema a igualar las posibilidades entre el Ministerio Público y de la Policía, como órganos de persecución penal del Estado; y en los deberes que correlativamente les impone la ley procesal penal. Se ha dicho que el Ministerio Público no es una parte del procedimiento penal, en el sentido de que haga valer en él un interés subjetivo, propio o ajeno, en la actuación de la ley penal, sino, por el contrario, un órgano público cuyo interés se resume en la correcta actuación de la ley penal; él tanto ampara al ciudadano, al incorporar la prueba de su inocencia y reclamar una decisión que lo libere de la persecución penal, como le imputa un hecho punible y demanda una consecuencia jurídica, bajo la condición procesal de que se verifique en el debate todos los extremos que condicionan esa consecuencia. De allí se desprende que el Ministerio Público no esté situado frente al imputado para inquirir o requerir sólo en contra de él, sino, todo lo contrario, para aclarar la imputación procesal que soporta y requerir también a su favor cuando corresponde; sólo con ese concepto se puede comprender que el Ministerio Público deba procurar la incorporación de los elementos

que sirvan para descargo del imputado, tenga la facultad de requerir el sobreseimiento o la absolución, si el resultado del procedimiento así lo indica, y pueda recurrir también a favor del imputado.

Con arreglo a esta concepción se ha sostenido también que la verdadera razón de la existencia del Ministerio Público consiste, precisamente, en procurar un juicio imparcial al imputado. Para lograrlo, resulta imprescindible desvincular al juzgador de toda afirmación imputativa, evitando que él sostenga como hipótesis aquello que después deberá examinar y decidir en un juicio, con ese punto de partida se logra, al mismo tiempo, asimilar tenuemente la persecución penal estatal a un proceso de partes, colocando frente al imputado, formalmente, a un contradictor.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en el Distrito Judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar este conformada por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01.

4.1. Análisis de los resultados:

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

4.1.1. Resultados del análisis estadístico.

Tabla 1: Estadística de la carga procesal en función a los expedientes penales atendidos den la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Expedientes principales ingresados a los Juzgados Penales de Chiclayo de la CSJLA	
Año	Carga Procesal
2014	924
2015	1324
2016	3010
2017	3872
2018	4457

4.1.2. Resultados del análisis jurisprudencial.

A efectos de poder establecer la identificación de la realidad jurisprudencial respecto a la garantía del derecho de defensa en la incoación del proceso inmediato, se han recogido las siguientes resoluciones:

1. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

EXPEDIENTE: 001545-2017-0-1706-JR-PE-04

ESPECIALISTA: LISSETE TORRES TAFUR

IMPUTADO: JHON DENNIS DIAZ DIAZ

DELITO: HURTO AGRAVADO

AGRAVIADO: ANGIE NICOLE COBEÑAS EFFIO

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo.

Fecha: 07 de febrero de 2017.

Hora: 11:20 A.M.

Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS.

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS

Chiclayo, siete de febrero del dos mil diecisiete

II. DEL DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN.

PRIMERO: Este Despacho luego de haber oído el requerimiento fiscal, tiene que verificar previamente para poder meritar si se trata de una prisión preventiva o no, la existencia copulativa de los tres requisitos del artículo 368 del Código Procesal Penal exige esto en graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado la imputación que se le está haciendo. El Ministerio Público imputa al procesado JHON

DENNIS DIAZ DIAZ, haber participado en el robo del vehículo del agraviado César Arsenio Zevallos Niño, indica que su participación ha sido despojar de su llave al amigo del agraviado, puesto que este primero se le ha tirado al señor Rache y que también ha golpeado con puños y patadas al agraviado.

(...)

Respecto a la situación que el Ministerio Público ha señalado peligro de obstaculización. Considero que no existe, respecto al peligro de fuga este despacho considera que el comportamiento del imputado durante el procedimiento el señor aquí presente ante un fiscal y un defensor público Juan Edilberto Burga Torres, ha dicho que es estudiante de una Universidad de la carrera de Ingeniería Ambiental, que paga doscientos cincuenta de pensión y que le queda cien soles para gastos y ante la suscrita ha dado una versión totalmente distinta y disímil en todas las consideraciones, este comportamiento no es lógico para una persona que ha terminado la secundaria y más aún que ha tenido un abogado defensor público que ha corroborado y le ha explicado los alcances, la suscrita conoce el trabajo del Dr. Burga Torres, sabe el tipo de profesional que es y no tiene duda que el procesado está mintiendo en esta audiencia y más aún que el Ministerio Público ha estado presente en la misma, por lo tanto para el solamente se da el peligro de fuga, pues el Estado tiene que salvaguardar la medida y derecho de toda persona a andar libremente sin tener el temor de ser violentado y robarle sus pertenencias, sus patrimonios o bienes que se adquiere con el trabajo de las personas, en este sentido hay que sopesar el derecho de la libertad ambulatoria del procesado y el derecho de la ciudadanía de vivir en tranquilidad sin ningún problema, puesto que considera que la medida para poder sopesar el proceso penal que es la averiguación de una verdad y de llevar a una terminación de dicha medida, el plazo de la prisión preventiva, dado que no hay más diligencia que hacer únicamente un requerimiento fiscal, considera que el máximo de prisión preventiva es nueve meses, considerando el plazo máximo será de sesenta días, a lo antes indicado SE RESUELVE:

I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra el investigado JHON DENNIS DIAZ DIAZ, por el delito Contra Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de César Arsenio Zevallos Niño, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el PLAZO DE DOS MESES,

computados desde la fecha de su detención 06 de febrero del 2017, vencerá el día 06 de abril del 2017, plazo suficiente para llegar a la etapa de juicio oral.

En este caso la señorita Juez NOTIFICA con la resolución oralizada a los sujetos procesales penales.

FISCAL: Conforme.

DEFENSA PÚBLICA: Se reserva el derecho.

IV. CONCLUSIÓN

Siendo las 12:39 minutos del mismo día, concluyó la audiencia, cerrándose la grabación de audio, suscribe el acta correspondiente la señora Juez y la Especialista Judicial de Audiencias.

2. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

EXPEDIENTE: 001659-2017-0-1706-JR-PE-04

ESPECIALISTA: LISSETE TORRES TAFUR

IMPUTADO: MIGUEL ANGEL SALAZAR SANTA CRUZ

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: MADELINE ESTHER PARILLO CONDORI

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo.

Fecha: 10 de febrero de 2017.

Hora: 12:00 A.M.

Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS.

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES

Chiclayo, diez de febrero

Del año dos mil diecisiete

AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el representante del Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra el imputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SANTA CRUZ; por el delito ROBO AGRAVADO, en agravio de Madeleine Esther Parillo Condori; así también el argumento del abogado defensor del imputado, alegaciones que obran registrado en el sistema de audio; y CONSIDERANDO:

II. DEL DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN.

PRIMERO: Este Despacho luego de haber oído el requerimiento fiscal, tiene que verificar previamente para poder meritar si se trata de una prisión preventiva o no, la existencia copulativa de los tres requisitos del artículo 368 del Código Procesal Penal exige esto en graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado la imputación que se le está haciendo. El Ministerio Público señala que el 08 de febrero del 2017 a horas 21:30, la agraviada Madeleine Esther Parrillo Condori, salía de su centro laboral en la peluquería Shono, en la Av. Santa Victoria, como se ha señalado, sale y saca su celular, se pone los audífonos y guarda el celular en la cartera, no había avanzado mucho y una persona se le acerca y forcejea con ella con la cartera, esta persona fue identificada como el procesado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SANTA CRUZ, ante su resistencia cae al suelo y en ese instante sigue forcejeando y le mienta la madre le insulta todo lo que pueda a fin de que soltara la cartera y ella al ver que le iba a patear soltó la cartera, él huye y en la huida le da la cartera al menor que lo acompañaba, en ese momento también aparece la policía y lo captura cerca al ovalo Santa Victoria.

(...)

El Ministerio Público está partiendo del peligro de fuga que el procesado no tiene arraigo en esta ciudad, que si bien es cierto tiene casa, pero no tiene familia, no tiene trabajo, la suscrita verificando, si bien es cierto esta persona cuenta con trabajo, según la hora de intervención policial era 21:30 aproximadamente – Santa Victoria y el imputado vive en el Centro Poblado Fanny Abanto, que es cerca de Chiclayo y Pimentel, indica que una

persona que no trabaja está paseando en horas de la noche con qué fin... el fin u objetivo era robar a las personas que pasaban, porque incluso una versión de su amigo el menor que fue detenido Tarrillo Llontop ha señalado que cuando él preguntó dónde vamos él nunca le respondió nada, el tipo de amistad y el tipo de situaciones indica que el procesado ya tiene este tipo de conductas, la juzgadora no encuentra para el procesado un arraigo firme, tener casa no te arraiga a un sitio, menos si no trabaja dado que al preguntarle si trabaja manifestó que no hacía nada, en ese sentido está acreditado el peligro de fuga, puesto que no tiene un arraigo laboral, no tiene una familia constituida ya sea cónyuge o conviviente, nada garantizada que esta persona se presentará voluntariamente al proceso, dado que el grado de pena ha de imponerse o mínimo de pena considerando el marco punitivo es una pena efectiva considerando los elementos de convicción que respalda esta imputación la cantidad de pena mínima será una pena efectiva no creyendo que voluntariamente se presente, las reducciones que se aplicaran no garantiza una pena suspendida, por estas circunstancias si bien es cierto el Ministerio Público sustenta que no tiene importancia el daño resarcible, esta juzgadora al escuchar su grado de instrucción primero de primaria no se le podría pedir mucho discernimiento en su conducta, será evaluado a nivel de juicio oral, cuando el Juez Juzgador pueda verificar sus valores morales, su grado de instrucción y esos sea ya considerados para aplicar una pena justa que lo ha señalado, a lo respecto al plazo de prisión la suscrita advierte que es un proceso inmediato, no hay diligencias que actuar solamente la etapa intermedia que sería control de acusación y el juicio oral ya que plazo máximo sería dos meses, la medida es proporcional idónea y necesaria, el Estado tiene a garantizar a la sociedad y el tipo de conducta que viola la esperada convivencia pacífica entre todo los ciudadanos, más que aún personas que trabajan honradamente compren sus cosas y ante cualquier persona que no discierne del bien y el mal están expuestos a este tipo de conducta donde se pierde ya el valor, los valores bienes ajenos, el valor del bien o mal hacen que la sociedad sean regantizada la única manera es llevar un proceso judicial y se aplique la pena necesaria, a lo antes indicado SE RESUELVE:

I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra el investigado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SANTA CRUZ, por el delito contra el Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Madeleine Esther Parillo Condori, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el PLAZO

DE DOS MESES, computados desde la fecha de su detención 08 de febrero del 2017, vencerá el día 07 de abril del 2017, plazo suficiente para llegar a la etapa de juicio oral.

3. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

EXPEDIENTE: 03318-2017-0-1706-JR-PE-04

ESPECIALISTA: GIULIANA AGUILARN TORRES

IMPUTADO: CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: PIO CUIMIAN SESEJAT

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo.

Fecha: 11 de abril de 2017.

Hora: 11:00 A.M.

Juez: DRA. JANET SANCHEZ CAJO, en reemplazo de la Juez Titular, se AVOCA al conocimiento de la presente causa por disposición superior.

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES

Chiclayo, once de abril

del año dos mil diecisiete

AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el representante del Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE y CESAR ABEL URUPEQUE GARCÍA, por la presunta comisión del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de PIO CUIMIAN SESEJAT; así también los

argumentos de los abogados defensores de los imputados, alegaciones que obran registrado en el sistema de audio; y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE y CESAR ABEL URUPEQUE GARCÍA, que el día 09 de abril del presente año, los imputados han interceptado al agraviado PIO CUIMIAN SESEJAT, habiendo sido cogoteado por uno de ellos, por el imputado César Abel Urupeque García, mientras que el señor Carlos Jesús Oviden Roque, sustrajo sus pertenencias como su celular color negro, marca Samsung y al otro de los nombrados se le encontró una billetera de color marrón, que tenía como imagen un billete de cien nuevos soles.

(...)

Por las consideraciones antes indicadas.

SE RESUELVE:

I. DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra los investigados CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE y CESAR ABEL URUPEQUE GARCÍA, quienes tienen la calidad de coautores por la presunta comisión del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de PIO CUIMIAN SESEJAT, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el PLAZO DE CINCO MESES, para que realice las diligencias pendientes de hacer, computados desde la fecha de su detención 09 de abril del 2017, vencerá el día 08 de septiembre del 2017.

II. SE ORDENA en este acto el INGRESO de los imputados a efecto de que sean trasladados al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex Picsi, cursándole el oficio correspondiente para tal fin.

III. SE NOTIFICA con la presente resolución a los sujetos procesales intervinientes.

Fiscal: Conforme.

Defensa Técnica de los imputados: Interponen recurso de apelación.

JUEZ: TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN y concede

4. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

EXPEDIENTE: 03412-2017-72-1706-JR-PE-04

ESPECIALISTA: LESLI CALDERÓN PORRAS

IMPUTADO: IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO Y OTRO

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: ANTONIO SANTAMARIA VALDERA

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo.

Fecha: 14 de abril de 2017.

Hora: 11:00 A.M.

Juez: DRA. JANET SANCHEZ CAJO, en reemplazo de la titular de este despacho por encontrarse de vacaciones, se AVOCA al conocimiento de la presente causa por disposición superior.

RESOLUCIÓN NUMERO: DOS

Chiclayo, catorce de abril

del año dos mil diecisiete. -

AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el representante del Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados MIGUEL ÁNGEL HUMÁN MIMBERA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, por la presunta comisión del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Antonio Santamaría Valdera; así también los argumentos del abogado defensor de los imputados, alegación que obran registrado en el Sistema de audio; y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados MIGUEL ÁNGEL HUMÁN MIMBERA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, que el día 17 de abril del año 2017, a horas 02:00 de la tarde aproximadamente entre la intersección de la Av. Balta con calle Pedro Ruiz de Chiclayo, se intervienen a las dos personas MIGUEL ÁNGEL HUAMAN MIMBELA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, quienes habrían asaltado violentamente a la persona de Antonio Santamaría Valdera, que al encontrarse esta persona sentado en una vereda efectuada en la intersección Balta y Pedro Ruiz, esperando amanezca para ir a su domicilio ubicado en Mórrope, fue interceptado por estas personas, quien siendo Miguel Ángel Huamán Mimbela, quien lo cogería de los pies para que el otro sujeto Roger Purisaca Marcelo, sustraiga su teléfono celular dada la resistencia que pone el agraviado a efecto de que sustraiga su pertenencia uno de ellos es decir Miguel Ángel Huamán Mimbela mordió su mano derecha logrando despojar su teléfono celular.

(...)

SE RESUELVE:

I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra los investigados MIGUEL ÁNGEL HUMAN MIMBELA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, por la presunta comisión del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Antonio Santamaría Valdera, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el PLAZO DE SIETE MESES, para que realice las diligencias pendientes de hacer, computados desde la fecha de su detención 13 de abril del 2017, vencerá el día 12 de noviembre del 2017.

En este acto la señorita Juez NOTIFICA con la resolución oralizada a los sujetos procesales penales.

FISCAL: Conforme.

Defensa Técnica de los imputados: Interpone recurso de apelación.

JUEZ: TIENE POR INTERPUESTO el recurso de apelación y concede el término de ley para fundamentarlo, en caso de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la misma.

IV. CONCLUSIÓN

Siendo 12:20 p.m., del mismo día, concluyó la audiencia, cerrándose la grabación de audio, suscribe el acta correspondiente la señora Juez y la Especialista Judicial de Audiencias.

5. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

EXPEDIENTE: 03408-2016-0-1706-JR-PE-04

ESPECIALISTA: KELLY PUESCAS CHUNGA

IMPUTADO: ÁNGEL GIANCARLOS ORTIZ GRANADOS Y OTRO.

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: XINTIA TATIANA DIAZ VELA Y OTRO

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo.

Fecha: 16 de abril de 2017.

Hora: 10:00 A.M.

Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS.

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES

Chiclayo, dieciséis de abril

del año dos mil diecisiete. -

AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el representante del Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados ÁNGEL JEANCARLOS ORTIZ GRANADOS y FREDY ENDERSON ORTIZ MIO, por la presunta comisión del Delito contra EL

PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de XINTIA TATIANA DIAZ VELA; así también los argumentos del abogado defensor de los imputados, alegaciones que obran registrado en el Sistema de audio; y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados ÁNGEL JEANCARLOS ORTIZ GRANADOS y FREDY ENDERSON ORTIZ MIO, de haber participado ambos en un concurso real en el delito de Robo Agravado, en primer lugar que el día 13 de abril del 2017 a horas 08:20., al haber perpetrado el ilícito contra Xintia Tatiana Díaz Vela en este caso el señor Freddy Ortiz Mio ha descendido de la moto lineal ha bajado y ha forcejeado con la agraviada, específicamente le ha sujetado el brazo a fin de que ésta suelte el celular, luego de esto ella ha luchado y fue empujada al piso donde cayó, asimismo su prima que lo acompañaba ese día de los hechos Grace Yvette Vela Huamán, ha forcejeado con el chofer de la mototaxi, pero al ver que su prima era lastimada corrió a ayudarla, luego éstos sujetos han huido a bordo de una moto lineal; el mismo día 13 de abril del presente año, a las 08:50 horas aproximadamente después de treinta minutos del primer hecho, los procesados también en una moto lineal en el caso del señor Freddy Ortiz Mio ha descendido de la moto lineal y le ha hurtado un celular que llevaba la agraviada, la menor Karen Mabel Quispe Lacerna, a la altura de la cintura ha forcejeado a fin de robarle dicho bien, posteriormente ha huido a bordo de una moto lineal conjuntamente con su coprocesado Ortiz Granados Ángel Jeancarlos, han sido perseguidos por personal policial y en su desesperación por evitar de ser intervenido, han maniobrado mal en el caso del chofer del vehículo que el procesado Ortiz Granados ha caído al suelo y fueron en ese momento intervenidos por personal policial.

SEGUNDO: Este Despacho considera que respecto al tipo penal de Robo Agravado de Código Penal conforme al artículo 189° indica: Que la pena no será menor de doce y mayor de veinte años; si el robo es cometido: 2) Durante la noche, 4) Concurso de dos o más personas.

Concordado con el artículo 188° el cual establece: “El que se apodera legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física...”

Asimismo, en el segundo hecho, concuerda con la tipificación jurídica y además es cometido: 7) en agravio de una menor de edad.

TERCERO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) Acta de intervención policial, de fecha 13 de abril del 2017, la que pone en conocimiento los dos hechos, b) Acta de registro personal, efectuada al imputado Fredy Enderson Ortiz Mio, en la cual hallan en su poder un teléfono celular marca MOVILE, color blanco de propiedad de la menor agraviada Karen Quispe Lacerna; c) Acta de incautación, efectuando al imputado Fredy Enderson Ortiz Mio, d) Acta de registro personal del imputado Ángel Jeancarlos Ortiz Granados, e) Consulta en línea de la telefonía en claro, en donde señala que el número de abonado 930828592, le pertenece a la persona de Xintia Tatiana Diaz Vela, f) Declaración jurada de la persona de Rosa Elizabeth Lacerna Sampi, quien señala que el equipo celular marca MOVILE color blanco, le pertenece a su menor hija Karen Mabel Quispe Lacerna, g) Acta de entrega de fecha 13 de abril del 2017, en donde se procede a hacer la entrega del celular marca MOVILE, h) Ficha de inscripción de RENIEC en donde señala que la menor agraviada Karen Mabel Quispe Lacerna al momento de los hechos tenía 17 años de edad, i) Declaración de la menor agraviada Karen Mabel Quispe Lacerna, quien narra la forma y circunstancia que fue víctima de robo por parte de los imputados, k) Declaración de Xintia Tatiana Diaz Vela, quien narra la forma y circunstancia que fue víctima de robo por parte de los imputados, l) Declaración de Grace Yvette Vela Huamán, m) Declaración de Juan José Fernández Ayala, ñ) Certificado Médico legal N° 005460-L, de fecha 13 de abril del 2017, practicando a la agraviada Xintia Tatiana Díaz Vela, o) Reporte del sistema OSIS del Ministerio Público en donde señala que el imputado Fredy Ortiz Mio, registra una formalización de la Investigación Preparatoria en la carpeta fiscal N° 709-2016, por el delito de robo agravado, p) Declaración del imputado Ángel Jeancarlos Ortiz Granados, de fecha 14 de abril del 2017, declaración del imputado Fredy Ortiz Mio.

Se puede apreciar que conforme a las dos primeras resoluciones antes mencionados el plazo otorgado por el órgano jurisdiccional a fin de llevar a cabo todo el juicio oral resulta ser un plazo corto puesto que resulta insuficiente para que el abogado defensor pueda proporcionar los medios de prueba suficientes para acreditar la inocencia o atenuar la responsabilidad penal de su patrocinado, por lo que muchos de los letrados optan por reservar su derecho ya que no cuentan con el tiempo suficiente para construir una oposición o defensa adecuada, así mismo cuando los abogados deciden apelar la resolución en la audiencia resulta ser muy breve el tiempo con que cuentan pues afectaría fundamentalmente a la defensa técnica del imputado por lo que la precariedad de la situación defensiva del procesado es manifiesta puesto que no tiene el tiempo suficiente para construir los fundamentos del recurso de apelación. Asimismo, por tratarse de un delito que reviste de mayor gravedad sería factible la existencia de un profundo nivel de esclarecimiento y una actividad probatoria más intensa y completa.

4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de ésta investigación.

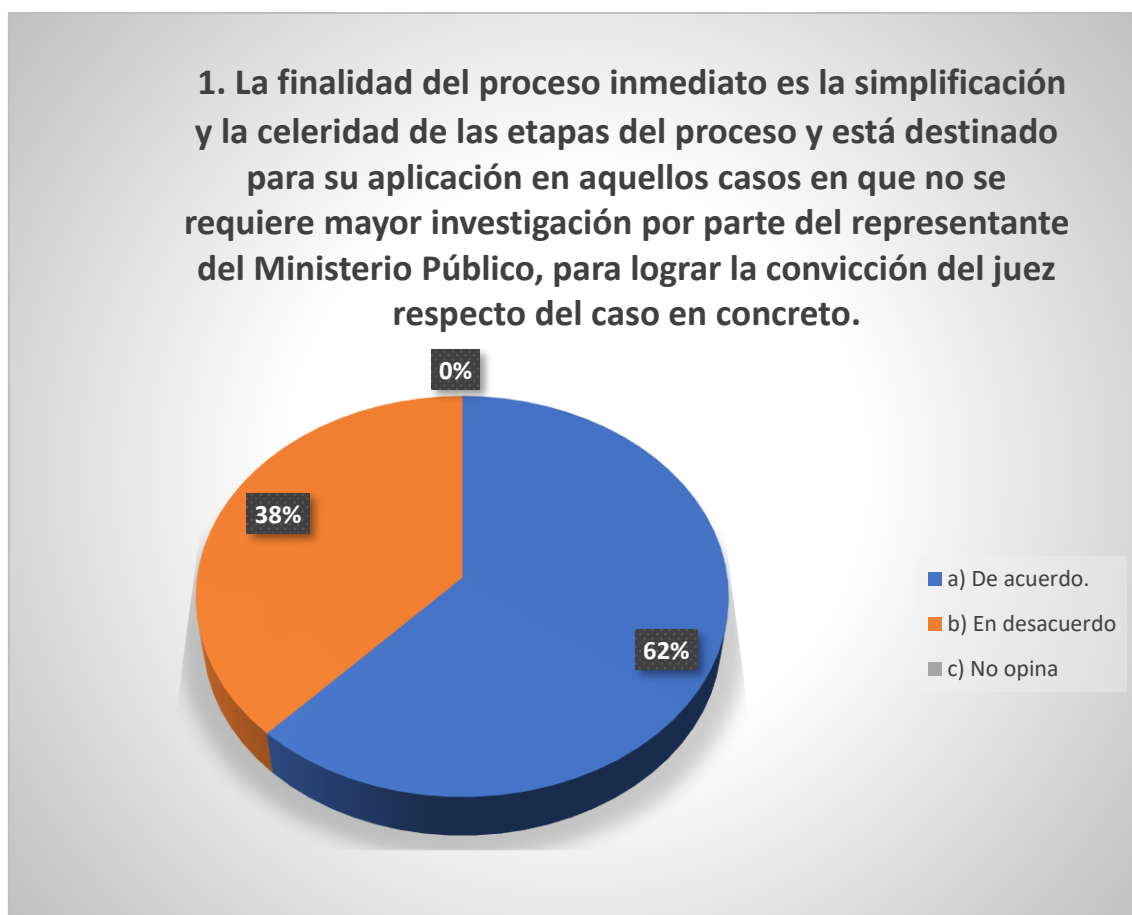
Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

<p>1. La finalidad del proceso inmediato es la simplificación y la celeridad de las etapas del proceso y está destinado para su aplicación en aquellos casos en que no se requiere mayor investigación por parte del representante del Ministerio Público, para lograr la convicción del juez respecto del caso en concreto.</p>	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	31
b) En Desacuerdo.	19
c) No Opina.	00
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 01, a la pregunta planteada, La finalidad del proceso inmediato es la simplificación y la celeridad de las etapas del proceso y está destinado para su aplicación en aquellos casos en que no se requiere mayor investigación por parte del representante del Ministerio Público, para lograr la convicción del juez respecto del caso en concreto de un total de 50 muestras realizadas, 31 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 19 de ellos indicaron No estar de acuerdo con la finalidad del proceso inmediato.

GRAFICO N° 01



Del resultado gráfico se puede observar que hay una marcación bastante dividida pues en las posiciones positivas y negativa, se encuentra un resultado casi cerca del 50%, esto permite apreciar una situación preocupante, teniendo en cuenta que la opción sobre la que se pide una opinión es precisamente la finalidad exacta del proceso inmediato, esto quiere decir que existe un sector de la comunidad jurídica que no está de acuerdo con la real finalidad del proceso inmediato.

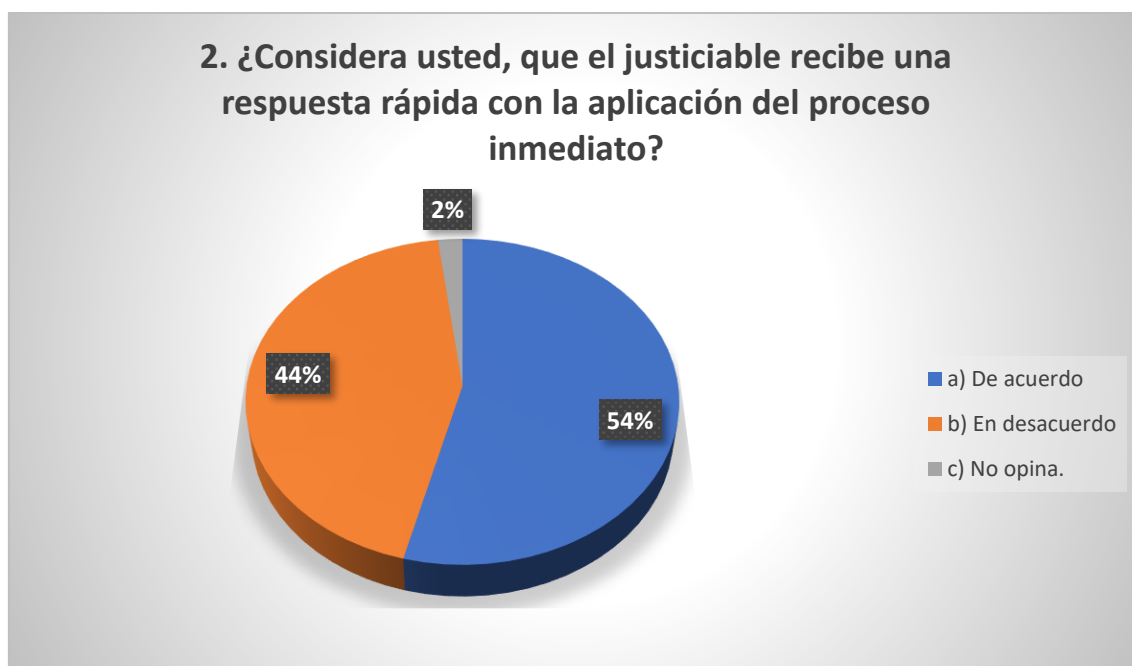
Por lo mismo que es posible inferir el razonamiento de que precisamente éste sector que comprende de una forma diferente la finalidad del proceso indicado, podría relacionarse con el nivel de ineficacia del mismo para lograr el efecto garantista del derecho penal, esto es que en razón de la inadecuada comprensión de la figura jurídica estudiada se genera un resultado adverso a la fluidez de los procesos puesto que produce un incremento innecesario de la carga procesal y en consecuencia vulnera el derecho de defensa.

TABLA N° 02

2. ¿Considera usted, que el justiciable recibe una respuesta rápida con la aplicación del proceso inmediato?	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	27
b) En Desacuerdo.	22
c) No Opina.	01
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 02, a la interrogante planteada: **¿Considera usted, que el justiciable recibe una respuesta rápida con la aplicación del proceso inmediato?** de un total de 50 muestras realizadas, 27 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo, 22 de ellos indicaron estar en completo desacuerdo y por último 01 no opina a la pregunta realizada.

GRAFICO N° 02



Según lo recopilado de la opinión de la comunidad jurídica se puede apreciar nuevamente una división bastante proporcional puesto que ambos resultados se encuentran cercanos a la mitad de la opinión, ello debe leerse en base al resultado de la pregunta anterior puesto que dejó la referencia de una concepción inadecuada de casi la mitad de la población jurídica encuestada; por lo mismo que el resultado de esta pregunta conduce a la idea de que efectivamente existe insatisfacción respecto de la eficacia del proceso inmediato y por ende del sistema de justicia, esto desde la perspectiva de los propios aplicadores del derecho.

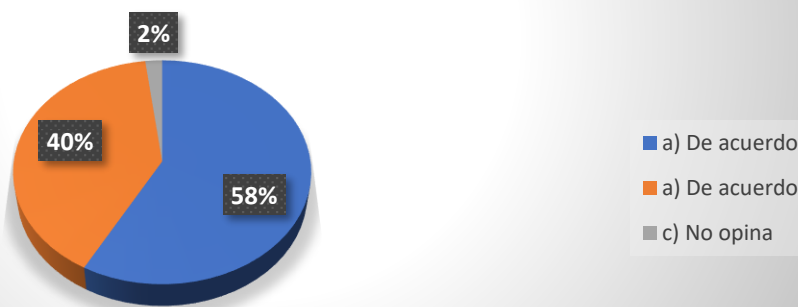
TABLA N° 03

3. Se considera una afectación de la autonomía en el nuevo régimen, al hecho de que el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato, lo cual transgrede la “autonomía” del Ministerio Público, esto implica que no actúe de manera objetiva.	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	27
b) En Desacuerdo.	22
c) No Opina.	01
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 03, a la interrogante planteada. Se considera una afectación de la autonomía en el nuevo régimen, al hecho de que el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato, lo cual transgrede la “autonomía” del Ministerio Público, esto implica que no actúe de manera objetiva. de un total de 50 muestras realizadas, 27 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo, 22 de ellos indicaron estar en completo desacuerdo y por último 01 no opina a la pregunta realizada.

GRAFICIO N° 03

3. Se considera una afectación de la autonomía en el nuevo régimen, al hecho de que el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato, lo cual transgrede la “autonomía” del Ministerio Público, esto implica que no actúe de manera objetiva.



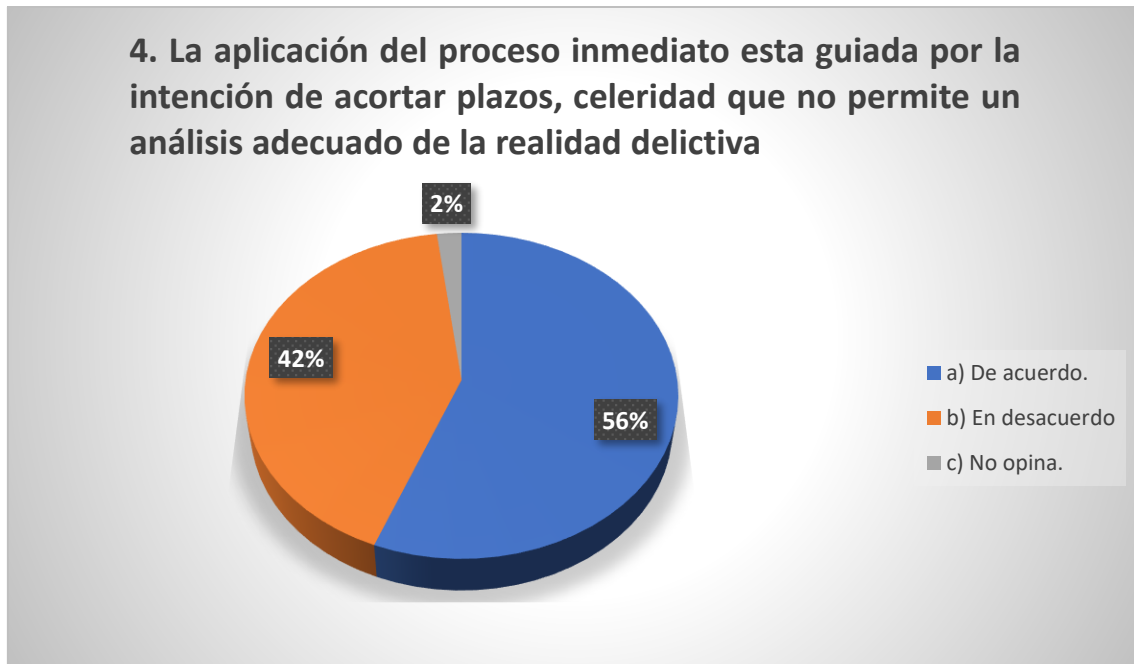
De los resultados obtenidos se puede decir que existe una relación entre la obligatoriedad del fiscal para incoar proceso inmediato y la vulneración del derecho de defensa ya que implica que el fiscal recaude elementos de convicción para formular su teoría del caso y acudir directamente a juicio; sin embargo, esto generaría que su actuación origine un estado de indefensión al imputado por no contar con los plazos ni los medios necesarios para preparar su defensa.

TABLA N° 04

4. La aplicación del proceso inmediato está guiada por la intención de acortar plazos, celeridad que no permite un análisis adecuado de la realidad delictiva.	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	28
b) En Desacuerdo.	21
c) No Opina.	01
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 04, a la interrogante planteada: La aplicación del proceso inmediato está guiada por la intención de acortar plazos, celeridad que no permite un análisis adecuado de la realidad delictiva. de un total de 50 muestras realizadas, 28 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo, 21 de ellos indicaron estar en completo desacuerdo y por último 01 no opina a la pregunta realizada.

GRAFICO N° 04



Estando corroborada la idea de que la obligatoriedad de incoar proceso inmediato vulnera el derecho de defensa, como otro efecto de esta misma circunstancia se puede ubicar al hecho de acortar plazos lo cual según un sector importante de la comunidad jurídica limita el derecho de defensa al no permitirse un adecuado análisis de la realidad delictiva.

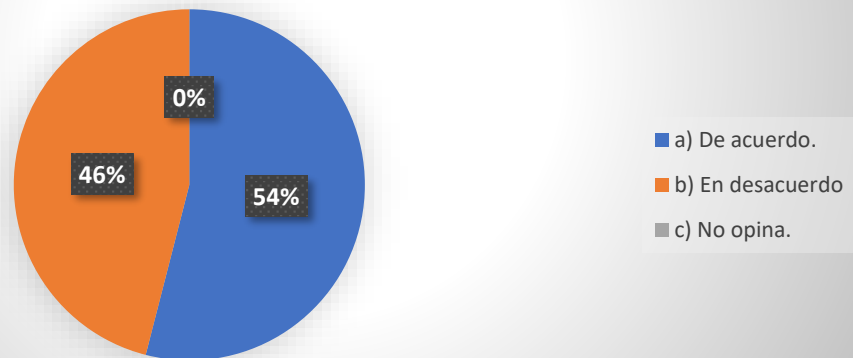
TABLA N° 05

5. La carga procesal en el proceso inmediato está condicionada a la cantidad de investigaciones que son calificadas en razón de la flagrancia por parte del Ministerio Público, cifra que sobrepasa la capacidad de los juzgados penales.	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	27
b) En Desacuerdo.	23
c) No Opina.	00
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 05, a la interrogante planteada: La aplicación del proceso inmediato está guiada por la intención de acortar plazos, celeridad que no permite un análisis adecuado de la realidad delictiva. de un total de 50 muestras realizadas, 27 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo y 23 de ellos indicaron estar en completo desacuerdo.

GRAFICO N° 05

5. La carga procesal en el proceso inmediato esta condicionada a la cantidad de investigaciones que son calificadas en razón de la flagrancia por parte del Ministerio Público, cifra que sobrepasa la capacidad de los juzgados penales.



Se debe indicar que existe una relación entre el incremento de la carga procesal y la calificación del Ministerio Público en base a la flagrancia, pero igual se aprecia posiciones proporcionalmente contrarias.

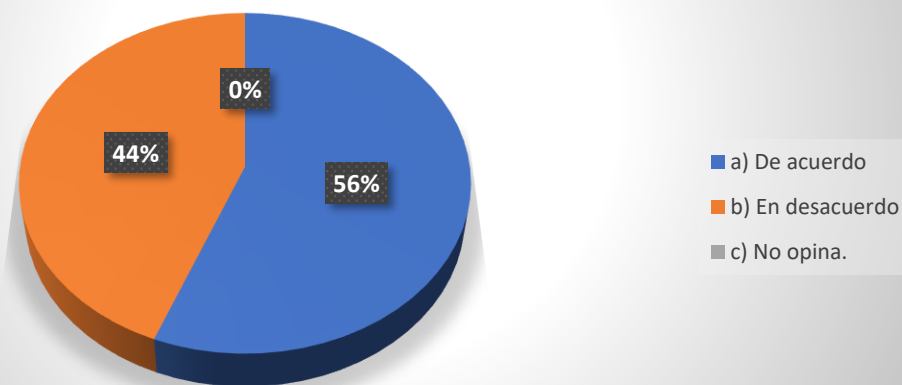
TABLA N° 06

6. La prolongación de los plazos en razón de la carga procesal, que se genera pese a la característica de celeridad del proceso inmediato, afecta la garantía que supone el derecho penal.	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	28
b) En Desacuerdo.	22
c) No Opina.	00
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 06, a la interrogante planteada: La prolongación de los plazos en razón de la carga procesal, que se genera pese a la característica de celeridad del proceso inmediato, afecta la garantía que supone el derecho penal. De un total de 50 muestras realizadas, 28 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo y 22 de ellos indicaron estar en completo desacuerdo.

GRAFICO N° 06

6. La prolongación de los plazos en razón de la carga procesal, que se genera pese a la característica de celeridad del proceso inmediato, afecta la garantía que supone el derecho penal.



Podemos apreciar que existe una opinión dividida ya que si bien es cierto con la aplicación del proceso inmediato se acortan los plazos a fin de lograr una pronta solución al conflicto de relevancia penal; sin embargo se puede observar que conforme a los resultados obtenidos por la comunidad jurídica es que no es cierto ya que a pesar de la característica de esta figura jurídica, la comunidad percibe un efecto contrario en razón de que la prolongación de dichos plazos, genera vulneración de la garantía que supone el Derecho Penal, es decir que no se cumplen con los plazos establecidos en la norma adjetiva sino más bien éstas son prolongadas.

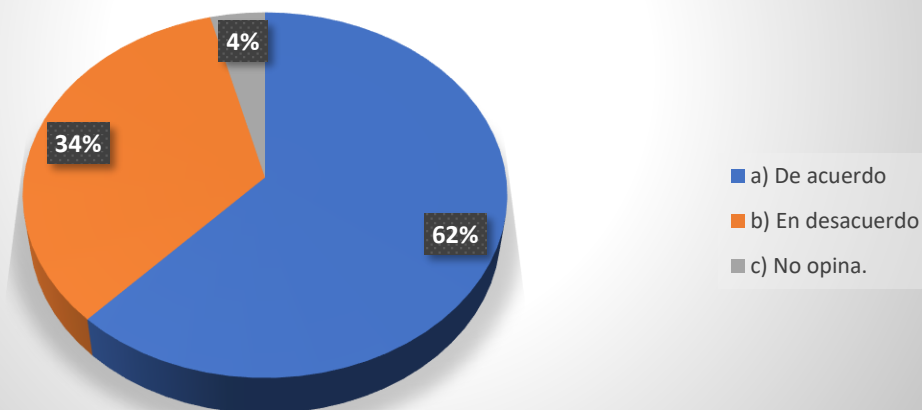
TABLA N° 07

7. El alejamiento de la inmediatez en el proceso inmediato por la dilación generada en razón de la carga procesal resulta afectando el derecho de defensa del imputado puesto que en el mismo plazo bien pudiera realizarse una investigación convencional con la garantía de sus derechos.	
ALTERNATIVA	RESPUESTA
a) De Acuerdo.	31
b) En Desacuerdo.	17
c) No Opina.	02
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 07, a la interrogante planteada: El alejamiento de la inmediatez en el proceso inmediato por la dilación generada en razón de la carga procesal resulta afectando el derecho de defensa del imputado puesto que en el mismo plazo bien pudiera realizarse una investigación convencional con la garantía de sus derechos. De un total de 50 muestras realizadas, 31 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo, 22 de ellos indicaron estar en desacuerdo y por último 02 de los entrevistados no opinaron.

GRAFICO N° 07

7. El alejamiento de la inmediatez en el proceso inmediato por la dilación generada en razón de la carga procesal resulta afectando el derecho de defensa del imputado puesto que en el mismo plazo bien pudiera realizarse una investigación convencional con la garantía de sus derechos.



Podemos precisar que conforme al resultado gráfico obtenido en base a la opinión de los aplicadores del derecho se advierte que la gran mayoría está de acuerdo que en vez de aplicar el proceso inmediato, sería factible para una mejor solución que se realice una investigación convencional con la cual se estaría garantizando el derecho de defensa del imputado y protegiendo los otros derechos del mismo.

CAPÍTULO V

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1. Discusión de los Resultados

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir una contrastación adecuada de la hipótesis planteada.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar el tratamiento doctrinario del proceso inmediato a nivel nacional e internacional”.

¿cuál será la definición más adecuada para el proceso inmediato?

El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal establecido en nuestro ordenamiento jurídico, en el cual tiene como finalidad que el proceso penal sea más célere y rápido a fin de poder solucionar el conflicto de relevancia penal y de ésta forma brindar al justiciable una respuesta rápida y oportuna resolviendo la situación jurídica del imputado dentro de un plazo razonable.

La circunstancia especial que caracteriza al proceso inmediato no sólo se recoge en el ordenamiento peruano sino que también se puede apreciar de otras legislaciones como es el hecho de lo establecido en España, pues así lo indica el investigador Salas Arenas (2016) quien indica:

En el ordenamiento español también considera la aplicación de un proceso célere para casos cuya pena privativa de libertad no exceda los 5 años, sancionados con otras penas y en determinados delitos, de acuerdo al artículo 795 de su regulación penal y que se trate de delitos flagrantes; lo que denomina enjuiciamiento rápido (pág. 66)

Conforme se puede apreciar se hace una distinción especial para aplicar el proceso inmediato o enjuiciamiento rápido, lo cual sugiere la necesidad de un acomodo para que en nuestra legislación se consiga el efecto garantista que supone el proceso penal. En ese sentido la concepción de la figura jurídica estudiada ha de tener la peculiaridad que la distinga por su excepcionalidad.

Asimismo en el artículo 21 del Código Penal Chileno establece como simple delito aquel que contenga las penas de presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, extrañamiento menor, delegación menor, destierro, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, inhabilitación perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, suspensión para conducir vehículos a tracción mecánica o animal.

Tal cual se puede apreciar de la descripción penal en el Código Chileno, existe una determinación puntual de los delitos que se deben considerar simples, regla que sin duda alguna hace más fácil la selección de las acciones delictivas sobre las cuales ha de aplicarse el proceso inmediato; realidad que no se puede observar en nuestro ordenamiento jurídico y que puede ser identificada como la posible causa del problema en su aplicación.

TOMA DE POSTURA:

La revisión del tratamiento del proceso inmediato a nivel nacional e internacional ha permitido establecer la existencia de un problema de especificación del cual adolece nuestro ordenamiento jurídico, así resulta necesaria el reordenamiento de la estructura procesal de modo tal que se permita la discrecionalidad de la evaluación fiscal para que se alcance optimización en la selección de las acciones delictivas sobre las cuales ha de aplicarse el proceso inmediato.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir el tratamiento legislativo del derecho de defensa y la previsión del control de la carga procesal en el Código Procesal Penal”.

Procesalmente se ha podido identificar dentro de la estructura del proceso ordinario una suerte de garantía adecuada del derecho de defensa, lo cual se evidencia en razón de la posibilidad que se establece en el mismo para ejercerla en base a la incorporación de medios probatorios como resultado de la investigación para que sean valorados en el proceso penal.

Tal situación no se aprecia bajo la misma característica en lo que se refiere a la aplicación del proceso inmediato, observándose además que existen problemas originados por el plazo establecido para el desarrollo del juicio, cuya premura obliga al imputado a la aceptación de defensores de oficio sin previo conocimiento de la causa o un adecuado seguimiento del caso, generándose la afectación de la libre determinación que permita seleccionar al profesional que se ocupe de su defensa.

Esta circunstancia obliga a la exigencia del respeto de las garantías a fin de evitar tal vulneración, lo cual sin duda alguna provoca la participación excesiva de los recursos dentro del proceso, que en ocasiones puede terminar dilatando lo que se supone ha de ser un proceso célere, esto es la desnaturalización de su inmediatez.

Conforme se puede apreciar de los resultados obtenidos se puede decir que existe una relación entre la obligatoriedad del fiscal para incoar proceso inmediato y la vulneración del derecho de defensa ya que implica que el fiscal recaude elementos de convicción para formular su teoría del caso y acudir directamente a juicio; sin embargo, esto generaría que su actuación origine un estado de indefensión al imputado por no contar con los plazos ni los medios necesarios para preparar su defensa.

Se debe indicar que existe una relación entre el incremento de la carga procesal y la calificación del Ministerio Público en base a la flagrancia, pero igual se aprecia posiciones proporcionalmente contrarias.

TOMA DE POSTURA

Según lo observado en la discusión de este objetivo se puede evidenciar que la estructura procesal que sirve para la aplicación del proceso inmediato adolece de falencias que provocan primero vulneración del derecho de defensa, en cuanto a lo referido a los plazos establecidos que no permiten la actuación de medios de prueba de una forma amplia, y por otro lado el hecho de que la carga procesal se ve incrementada de manera progresiva e innecesaria debido a la aplicación indiscriminada producto de la ausencia de marcadores

legislativos que limiten su incoación a ciertos delitos de lesión mínima como sucede en el extranjero.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Verificar jurisprudencialmente la protección del derecho de defensa en el proceso inmediato”.

Ha de tenerse en cuenta de que el derecho de defensa de toda persona nace, según el texto constitucional, desde que es citada o detenida por la autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación del imputado, no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le vincule con la comisión de un delito. Existiendo una imputación nace el derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación tiene, en cuanto posibilidad procesal, el derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva.

Es en base a ello que al revisar la forma en que se aplica el proceso inmediato en el distrito judicial de Lambayeque un problema respecto al corto plazo otorgado por el órgano jurisdiccional a fin de llevar a cabo todo el juicio oral, que resulta insuficiente para que el abogado defensor pueda proporcionar los medios de prueba suficientes para acreditar la inocencia o atenuar la responsabilidad penal de su patrocinado, por lo que muchos de los letrados optan por reservar su derecho ya que no cuentan con el tiempo suficiente para construir una oposición o defensa adecuada.

De otro lado se puede apreciar la opinión de los operadores jurídicos respecto a la interrogante planteada: La prolongación de los plazos en razón de la carga procesal, que se genera pese a la característica de celeridad del proceso inmediato, afecta la garantía que supone el derecho penal. La cual ha tenido como resultado una opinión dividida ya que si bien es cierto con la aplicación del proceso inmediato se acortan los plazos a fin de lograr una pronta solución al conflicto de relevancia penal; sin embargo se puede observar que conforme a los resultados obtenidos por la comunidad jurídica es que no es cierto ya que a pesar de la característica de esta figura jurídica, la comunidad percibe un efecto contrario en razón de que la prolongación de dichos plazos, genera vulneración de la

garantía que supone el Derecho Penal, es decir que no se cumplen con los plazos establecidos en la norma adjetiva sino más bien éstas son prolongadas.

TOMA DE POSTURA:

Se ha podido apreciar que a nivel jurisdiccional la aplicación del proceso inmediato esta revestida de circunstancias que si bien es cierto se orientan en razón de las reglas que se ocupan de sus características, no necesariamente surten el efecto de eficacia esperado, puesto que se notan detalles como el plazo que limita la garantía del derecho a la defensa puesto que de no existir tiempo suficiente para el desarrollo de una estrategia apropiada, la defensa técnica esta destinada a fracasar, mientras que por otro lado el problema de su aplicación con la característica de la medida cautelar de prisión preventiva observada en las resoluciones analizadas sugiere la necesidad de una investigación antes del juicio lo cual desnaturaliza la concepción de proceso inmediato.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de generar una propuesta de cambio normativo respecto a la estructura del proceso inmediato”.

Ante lo observado en las discusiones anteriores se puede recoger como base la concepción teórica del proceso inmediato y su finalidad que es otorgar rapidez y eficacia al proceso penal, lo cual no se ve reflejado en la aplicación procesal de esta figura puesto que del análisis se ha identificado circunstancias que desnaturalizan su concepto.

Por lo mismo que se hace urgente y necesario un ajuste de la estructura procesal que regula la figura del proceso inmediato, dado que se hace necesario el aseguramiento del derecho a la defensa del imputado, lo cual debe ser orientado por lo que se ha observado de los ejemplos internacionales que puntualizan la forma en que se ha de identificar un delito bajo la condición de leve o grave, sirviendo ello para permitir determinar a que tipo de acciones delictivas puede ser incoada la acción inmediata de la ius puniendi del Estado.

5.2. Resultado De Validación De Variables

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Incorrecta aplicación del proceso inmediato.

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si el proceso inmediato en su aplicación adolece de acciones incorrectas por parte de los operadores jurídicos que tienen a su cargo su incoación, esto es los fiscales y magistrados del poder judicial; en ese sentido tras la verificación de la realidad a través del análisis de las resoluciones que aplican la figura se ha podido observar falencias no de corte procesal sino más bien de tipo interpretativo.

Es decir que el problema que se identifica como una incorrecta aplicación está en razón de la finalidad que cumple teóricamente el proceso inmediato, puesto que no se aprecia celeridad ni mucho menos eficacia en la garantía de ciertos derechos como el de la eficiente defensa técnica del imputado, además de la incorporación de medidas cautelares como lo es la prisión preventiva cuya naturaleza supone aseguramiento de los procedimientos que incorpora la investigación.

Advirtiéndose entonces un efecto negativo de la aplicación del proceso inmediato en el distrito judicial de Lambayeque que se proyecta sobre el derecho de defensa y la desnaturalización del concepto de proceso inmediato; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La incorrecta aplicación del proceso inmediato se evidencia en razón de la vulneración del derecho de defensa y la incorporación de medidas cautelares que desnaturalizan su concepto.

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Carga procesal y vulneración del derecho de defensa.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado se ha podido apreciar que la circunstancia de una incorrecta aplicación del proceso inmediato sugiere el incremento innecesario de la carga procesal, puesto que al advertirse la desnaturalización de su concepto trae como consecuencia el uso excesivo de la figura, alejándose de la finalidad para la cual fue implementada, otorgándose la responsabilidad de ello a la modificación que exige al fiscal incoar proceso inmediato; sumado a ello este uso desmedido se encuentra en la realidad con la ya existe carga respecto de otros procesos, lo que provoca reprogramaciones que empeoran la situación advertida ralentizando el proceso que se supone debería ser célere.

Luego además del incremento de la carga, se aprecia la vulneración al derecho de defensa del imputado en razón de los plazos tan cortos que impiden la preparación de una defensa técnica eficaz; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

Se evidencia el incremento de la carga procesal en razón de la excesiva aplicación del proceso inmediato siendo otra consecuencia la vulneración del derecho de defensa.

5.3. Contrastación De Hipótesis

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

La incorrecta aplicación del proceso inmediato se evidencia en razón de la vulneración del derecho de defensa y la incorporación de medidas cautelares que desnaturalizan su concepto; entonces, ello produce el incremento de la carga en razón de la excesiva aplicación de esta figura procesal, requiriéndose la implementación de reglas que garanticen el derecho de defensa.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si logramos demostrar que existe una incorrecta aplicación del proceso inmediato; entonces, diremos que tal situación repercute directamente en la carga procesal y vulneración del derecho de defensa.	La incorrecta aplicación del proceso inmediato se evidencia en razón de la vulneración del derecho de defensa y la incorporación de medidas cautelares que desnaturalizan su concepto; entonces, ello produce el incremento de la carga en razón de la excesiva aplicación de esta figura procesal, requiriéndose la implementación de reglas que garanticen el derecho de defensa.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado que hace falta una modificación de la regulación procesal del proceso inmediato donde se señale la diferenciación de los delitos sobre los cuales ha de aplicarse, haciendo falta para ello que se establezca una regla que permita diferenciar el límite entre un delito leve y otro grave.

CONCLUSIONES

PRIMERA

Del desarrollo doctrinario sobre el tratamiento del proceso inmediato a nivel nacional e internacional ha permitido establecer la existencia de un problema de especificación del cual adolece nuestro ordenamiento jurídico, así resulta necesaria el reordenamiento de la estructura procesal de modo tal que se permita la discrecionalidad de la evaluación fiscal para que se alcance optimización en la selección de las acciones delictivas sobre las cuales ha de aplicarse el proceso inmediato.

SEGUNDA:

Luego de describir el tratamiento legislativo del derecho de defensa y la previsión del control de la carga procesal en el Código Procesal Penal se puede concluir que la estructura procesal que sirve para la aplicación del proceso inmediato adolece de falencias que provocan primero vulneración del derecho de defensa, en cuanto a lo referido a los plazos establecidos que no permiten la actuación de medios de prueba de una forma amplia, y por otro lado el hecho de que la carga procesal se ve incrementada de manera progresiva e innecesaria debido a la aplicación indiscriminada producto de la ausencia de marcadores legislativos que limiten su incoación a ciertos delitos de lesión mínima como sucede en el extranjero.

TERCERA:

Al observar jurisprudencialmente la protección del derecho de defensa en el proceso inmediato se ha podido determinar que esta revestida de circunstancias que si bien es cierto se orientan en razón de las reglas que se ocupan de sus características, no necesariamente surten el efecto de eficacia esperado, puesto que se notan detalles como el plazo que limita la garantía del derecho a la defensa puesto que de no existir tiempo suficiente para el desarrollo de una estrategia apropiada, la defensa técnica está destinada a fracasar, mientras que por otro lado el problema de su aplicación con la característica de la medida cautelar de prisión preventiva observada en las resoluciones analizadas sugiere la necesidad de una investigación antes del juicio lo cual desnaturaliza la concepción de proceso inmediato.

CUARTA

En función del análisis de la posibilidad de generar una propuesta de cambio normativo respecto a la estructura del proceso inmediato se ha logrado concluir que se hace urgente y necesario un ajuste de la estructura procesal que regula la figura del proceso inmediato, dado que se hace necesario el aseguramiento del derecho a la defensa del imputado, lo cual debe ser orientado por lo que se ha observado de los ejemplos internacionales que puntualizan la forma en que se ha de identificar un delito bajo la condición de leve o grave, sirviendo ello para permitir determinar a qué tipo de acciones delictivas puede ser incoada la acción inmediata de la ius puniendi del Estado.

RECOMENDACIONES

PRIMERA

Se puede recomendar al poder legislativo que se ocupe de generar una revisión de la regla que promueve la estructura procesal que sirve para la aplicación del proceso inmediato a fin de identificar las falencias que deberán corregirse a fin de garantizar el derecho de defensa; así como también, la reconsideración de los plazos establecidos que no permiten la actuación de medios de prueba de una forma amplia.

SEGUNDA:

Se sugiere de igual modo la creación de una regla penal que permita clasificar los delitos entre grave y leves para lo cual señalará los parámetros que procuren la distinción en función a penas y lesión de bienes jurídicos, tomando como ejemplo la legislación Chilena.

Bibliografía

- ARAYA VEGA, A. (2016). *Nuevos Proceso Inmediato para los Delitos de Flagrancia*. Lima: Ideas.
- BALAZAR PAZ, V. (2015). *El Proceso Inmediato según D.L. 1194*. Lima: Actualidad Penal.
- BENAVENTE CHORES, H. (2011). "La Acusación Directa y el Proceso Inmediato en el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116", Lima. *Gaceta Penal y Procesal Penal*.
- BINDER, A. (2000). *Introducción al Derecho Procesal Penal* (Segunda ed.). Buenos Aires: Ad - Hoc.
- CAFFERATA NORES, J. (1998). *La Prueba en el Proceso Penal*. Buenos Aires: De Palma.
- CARNELUTTI, F. (1950). *Lecciones sobre el Proceso Penal*. Buenos Aires: EJEA.
- CLARÍA OLMEDO, J. (1960). *Tratado de Derecho Procesal Penal* (Vol. I). Buenos Aires: EDIAR.
- CUBAS VILLANUEVA, V. (2006). *El Proceso Penal* (Sexta ed.). Lima: Palestra Editores.
- DE LA OLIVA SANTOS, A. (2003). *Derecho Procesal Penal* (Sexta ed.). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areos.
- DE LA OLIVA SANTOS, A., ARAGONESES MARTÍNEZ, S., HINOJOSA SEGOVIA, R., MUERZA ESPARZA, J., & TOMÉ GARCÍA, J. (1993). *Derecho Procesal Penal*. Madrid: Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces.
- GARCÍA RADA, D. (1965). *Instituciones de Derecho Procesal Penal*. Lima: Studium.

- GIMENO SENDRA, J. V., MORENO CATENA, V., & CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. (1996). *Derecho Procesal Penal*. Madrid: Colex.
- GOMÉZ COLOMER, J. L. (2008). *El Sistema de Enjuiciamiento Criminal propio de un Estado de Derecho*. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- MAIER, J. (1996). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- MAIER, J. (1999). *Derecho Procesal Penal* (Segunda ed.). Buenos Aires: Editores del Puerto.
- MENDOZA CALDERON, G. (2015). "El Proceso Inmediato en el Proceso Penal Peruano (Aplicacion del Decreto Legislativo N° 1194)". *Gaceta Penal y Procesal Penal*.
- NEYRA FLORES, J. A. (2010). *Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigacion Oral*. Lima: IDEMSA.
- PEÑA - CABRERA FREYRE, A. (2006). La Etapa Intermedia en el Código Procesal Penal 2004. Las Funciones del Ministerio Público y el Juez de la Investigación Preparatoria. *Actualidad Jurídica*(157).
- REYNA ALFARO, L. (2015). *"Manual de Derecho Procesal Penal"*. Lima: Pacífico.
- RIQUELME, V. (1946). *Instituciones del Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Atalaya.
- RUBIO CORREA, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
- Salas Arenas, J. L. (2016). Cuestiones problemáticas del proceso inmediato según el decreto legislativo 1194. En Estudio Jurídico Arsenio Ore Guardia, *El nuevo*

proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción (Primera ed., págs. 35-70). Lima: Gaceta Jurídica.

SALINAS SICCHA, R. (2010). *Derecho Penal Parte Especial* (Cuarta ed., Vol. I). Lima: GRIJLEY.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (2003). *Derecho Procesal Penal* (Segunda ed., Vol. I). Lima: GRIJLEY.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (2015). *Derecho Procesal Penal: Lecciones*. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales.

SÁNCHEZ VELARDE, P. (1994). *Comentarios al Código Procesal Penal*. Lima: IDEMSA.

SÁNCHEZ VELARDE, P. (2009). *El Nuevo Proceso Penal*. Lima: IDEMSA.

URTECHO BENITES, S. E. (2014). *Los Medios de Defensa Técnicos y El Nuevo Proceso Penal Peruano* (Segunda ed.). Lima: Idemsa.

ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO



TESIS:

“EL EFECTO DEL PROCESO INMEDIATO SOBRE LA CARGA PROCESAL Y EL DERECHO DE DEFENSA”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomarán como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

I. Incorrecta aplicación del proceso inmediato.

1. La finalidad del proceso inmediato es la simplificación y la celeridad de las etapas del proceso y está destinado para su aplicación en aquellos casos en que no se requiere mayor investigación por parte del representante del Ministerio Público, para lograr la convicción del juez respecto del caso en concreto.
 - a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.

2. ¿Considera usted, que el justiciable recibe una respuesta rápida con la aplicación del proceso inmediato?
 - a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.

3. Se considera una afectación de la autonomía en el nuevo régimen, al hecho de que el fiscal tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato, lo cual transgrede la “autonomía” del Ministerio Público , esto implica que no actúe de manera objetiva.
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.
4. La aplicación del proceso inmediato esta guiada por la intención de acortar plazos, celeridad que no permite un análisis adecuado de la realidad delictiva
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.


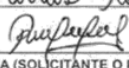
II. Carga procesal y vulneración del derecho de defensa

5. La carga procesal en el proceso inmediato esta condicionada a la cantidad de investigaciones que son calificadas en razón de la flagrancia por parte del Ministerio Público, cifra que sobrepasa la capacidad de los juzgados penales.
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.
6. La prolongación de los plazos en razón de la carga procesal, que se genera pese a la característica de celeridad del proceso inmediato, afecta la garantía que supone el derecho penal.
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo
 - c) No opina.
7. El alejamiento de la inmediatez en el proceso inmediato por la dilación generada en razón de la carga procesal resulta afectando el derecho de defensa del imputado

puesto que en el mismo plazo bien pudiera realizarse una investigación convencional con la garantía de sus derechos.

- a) De acuerdo.
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

**ANEXO 2: Solicitud presentada al Sistema de Información Judicial de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque.**

 PODER JUDICIAL	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA <small>(TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 043-2003-PCM)</small> E-MAIL:		N° DE REGISTRO
I FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN Lisset Ariaga Huayán			
II DATOS DEL SOLICITANTE			
MARCAR CON UN "X" <input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica		TELEFONO / E-mail 957536274/maribel_1392@hotmail.com	N° RUC (Sólo para Personas Jurídicas)
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL Pisfil Pavaras Roxana Maribel			
LE/DNI (Persona Natural) 47061000	AV/CALLE/JIRÓN C.R.M. Callao - Mz. E - Lt. 40	N° DPTO 	DISTRITO Mousetú
		PROVINCIA Chilayo	DEPARTAMENTO Lambayeque
III INFORMACIÓN SOLICITADA			
1) Solicitar la cantidad de expedientes ingresados a los Juzgados Unipersonales de la ciudad de Chilayo en los periodos 2014 al 2018 por materias.			
2) Solicitar la cantidad de expedientes sentenciados en los Juzgados Unipersonales de la ciudad de Chilayo por proceso inmediato en los periodos 2014 al 2018.			
IV DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN Estadística			
V FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X")			
<input checked="" type="checkbox"/> Copia Simple <input type="checkbox"/> Copia Certificada <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Correo Electrónico			
APELLIDOS Y NOMBRES Pisfil Pavaras Roxana Maribel		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 	
FIRMA (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 			
LE / DNI 47061000			





FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La forma de entrega estará sujeta a la capacidad técnica de la dependencia
2. En caso de Representante Legal, deberá adjuntar copia simple del Documento que acredite la representación

Desglosable para el usuario

 PODER JUDICIAL	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	N° DE REGISTRO
II DATOS DEL SOLICITANTE		FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) Pisfil Pavaras Roxana Maribel		
		
		UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES CSJLA/PJ 01 MAR. 2019 RECEPCIÓN Hora: 11:25 Firma:

ANEXO 3 : Resultados de la Solicitud presentada al Sistema de Información

Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Expedientes principales ingresados a los Juzgados Penales de Chiclayo de la CSJLA

Periodo: 2014 - 2018

Delitos	2014	2015	2016	2017	2018	Total
(Sin Delito Consignado)	5	0	3	0	0	8
Abandono de gestante en situación crítica	0	0	0	0	1	1
Abuso de autoridad.	6	6	3	4	2	21
Actos contra el pudor en menores (Agravantes:prevalencia del agente sobre la víctima, acto degradante o producción de daño físico o mental de la víctima <u>que el agente pudo prever</u>).	1	0	1	0	0	2
Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 años).	4	6	4	6	1	21
Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10 - 14 años).	10	6	11	17	9	53
Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10 14 años).	0	0	0	0	1	1
Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7 - 10 años).	3	3	6	9	3	24
Actos contra el pudor.	2	3	6	3	1	15
Actos ilícitos	1	1	1	0	0	3
Actos preparatorios de minería ilegal	0	0	1	0	1	2
Administración fraudulenta.	0	1	0	0	0	1
Adulteración de sustancias o bienes destinados al uso público.	0	0	0	1	1	2
Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar	0	3	2	26	25	56
Agrupación ilícita destinada a cometer delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad pública, contra el Estado y la defensa nacional o <u>contra los poderes del Estado y el orden cc</u>	0	1	0	0	0	1
Agrupación ilícita.	1	2	3	3	0	9
Allanamiento ilegal de domicilio.	0	1	0	0	0	1
Alteración del ambiente o paisaje.	0	0	2	0	0	2
Alteración o supresión de la filiación de menor	0	0	0	1	0	1
Alteración o suspensión del estado civil	0	0	1	0	0	1
Apropiación ilícita.	13	16	23	30	11	93
Apropiación irregular.	1	0	1	0	0	2
Asesinato	3	2	4	0	1	10
Atentado a la integridad de datos informáticos	0	0	0	1	0	1
Atentado contra la autoridad o funcionario	0	1	0	2	1	4
Atentado contra monumentos arqueológicos.	3	1	1	1	0	6
Atentados contra el derecho de sufragio	0	1	1	0	1	3
Autoaborto	1	2	0	0	0	3
Calumnia	25	51	34	40	31	181
Chantaje	1	1	1	0	0	3
Coacción	4	4	2	1	2	13
Coacción al consumo de droga	0	0	0	1	0	1
Cohecho Activo en el Ámbito de la función policial	0	0	0	1	0	1
Cohecho activo específico	0	2	0	2	0	4
Cohecho activo genérico	3	1	0	1	0	5
Cohecho pasivo impropio	1	4	1	5	0	11
Cohecho pasivo propio	3	4	2	2	2	13
Colusión	4	4	2	0	4	14
Colusión agravada	4	1	0	5	1	11
Comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o <u>productos sanitarios sin garantía de buen estado</u>	0	0	1	2	0	3
Comercialización o tráfico de productos nocivos.	0	2	0	0	0	2
Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva <u>(Agravante: Coacción o violencia física).</u>	1	0	0	0	0	1
Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva.	3	0	0	0	0	3
Concusión	0	2	0	0	0	2
Conducción en estado de ebriedad o drogadicción.	42	62	814	1194	1042	3154
Contaminación del medio ambiente.	0	0	12	23	5	40
Contrabando	3	1	2	3	0	9
Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales	1	0	0	0	0	1

Delitos	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Daño	0	1	1	2	2	6
Daño agravado	0	0	0	4	0	4
Daño de obras útiles para la defensa común.	0	0	1	1	0	2
Daños	7	7	8	10	4	36
Defraudación Tributaria	1	1	2	3	0	7
Defraudaciones, fraude procesal,abuso de firma en blanco.	4	9	8	3	0	24
Delito de Intrusismo y de Fraude Informático.	1	0	2	0	0	3
Delito de minería ilegal	0	0	26	13	1	40
Delito de Sabotaje Informático	0	0	0	0	1	1
Denegación a administrar justicia	0	0	0	1	0	1
Denuncia calumniosa.	3	0	4	1	1	9
Depredación de bosques legalmente protegidos.	0	0	67	20	2	89
Depredación de flora y fauna legalmente protegidas.	0	0	7	4	3	14
Desobediencia o resistencia a la autoridad	7	11	8	16	18	60
Destrucción o alteración de hitos fronterizos.	0	0	0	0	1	1
Destrucción, extracción, extracción ilegal de bienes culturales.	1	0	0	0	0	1
Desvío ilegal de divisas.	1	0	0	0	0	1
Desvío ilegal del curso de las aguas	0	0	1	0	0	1
Difamación	95	118	89	105	107	514
Discriminación e incitación a la discriminación	0	1	0	0	0	1
Disturbios	0	1	0	0	0	1
Ejercicio arbitrario de un derecho/justicia por propia mano	0	2	0	0	0	2
Ejercicio ilegal de una profesión.	2	0	0	5	0	7
Empleo, producción y transferencia de minas antipersonales	1	0	0	0	0	1
Encubrimiento personal	0	1	1	0	0	2
Encubrimiento personal (Tipo base).	0	0	0	1	0	1
Encubrimiento real.	0	1	0	0	0	1
Enriquecimiento ilícito.	1	0	0	0	0	1
Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.	1	0	0	0	0	1
Estafa agravada	0	7	4	5	4	20
Estafa genérica	14	33	20	20	2	89
Exhibiciones y publicaciones obscenas.	0	3	1	4	3	11
Expedición y uso de certificado médico falso	0	1	0	0	0	1
Exposición al peligro o abandono de persona menor o incapaz	2	0	0	0	0	2
Extorsión.	4	1	13	5	4	27
Extracción de especies acuáticas prohibidas.	0	0	1	0	0	1
Extracción ilegal de especies acuáticas	0	0	0	1	0	1
Fabricación o uso no autorizado de patente	0	3	1	3	0	7
Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos	14	20	12	16	12	74
Falsa declaración de testigos y peritos en juicio	0	0	1	1	0	2
Falsa declaración en proceso administrativo.	18	23	12	14	4	71
Falsedad genérica.	6	7	10	15	4	42
Falsedad ideológica.	6	18	19	24	10	77
Falsificación de documentos	31	35	37	24	6	133
Falsificación de documentos.(agravante por documento público)	3	5	1	1	0	10
Falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios	0	0	1	0	0	1
Faltas contra la tranquilidad pública.	2	0	2	1	0	5
Favorecimiento a la fuga.	0	0	0	1	0	1
Feminicidio	0	2	0	4	2	8
Financiamiento por medio de información fraudulenta.	2	0	0	0	0	2
Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas.	2	1	1	6	1	11
Formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad	1	1	3	3	0	8
Formas agravadas:	0	0	6	3	1	10
Fraude informático - afecte patrimonio del Estado	0	2	3	2	1	8
Fraude procesal.	12	16	14	12	3	57

Delitos	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Fuga en accidente de tránsito.	1	2	2	5	4	14
Funcionamiento ilegal de casinos y maquinas	0	1	0	0	0	1
Homicidio culposo	4	18	6	12	5	45
Homicidio Simple	5	4	8	3	3	23
Hurto agravado.	42	103	47	69	87	348
Hurto de ganado.	2	2	1	2	1	8
Hurto simple.	8	16	5	9	8	46
Incumplimiento de deberes funcionales.	8	3	4	4	0	19
Inducción a la fuga de menor	0	2	0	1	0	3
Ingreso ilegal a terreno cercado	0	0	1	0	0	1
Ingreso Indevido de Equipos de Comunicación al Interior de un Establecimiento Penitenciario	10	3	2	4	5	24
Injuria	20	27	17	14	15	93
Insolvencia provocada	1	0	0	0	0	1
Intervención o escucha telefónica	0	0	0	1	0	1
Lavado de Activos	1	1	0	0	0	2
Lesiones culposas	10	13	22	29	25	99
Lesiones Dolosas	1	3	0	10	1	15
Lesiones Graves	13	20	11	28	12	84
Lesiones graves a menor de edad	1	0	0	0	0	1
Lesiones graves por violencia familiar	1	3	1	1	5	11
Lesiones Leves	18	27	21	67	61	194
Lesiones leves a menor de edad	1	0	0	1	2	4
Lesiones leves por Violencia Familiar	6	1	3	162	971	1143
Libramientos de cobro indebido	6	4	6	5	4	25
Maltrato cruel de animales	0	0	0	0	1	1
Maltratos	0	0	0	0	2	2
Malversación de fondos.	1	1	0	0	0	2
Microcomercialización o microproducción.	14	30	23	29	22	118
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo	2	3	7	3	0	15
Nombramiento y aceptación indebida para cargo público.	0	0	1	4	0	5
Obstrucción a la función de autoridades elegidas	0	1	0	0	0	1
Omisión de asistencia familiar	170	276	1047	1329	1674	4496
Omisión de auxilio o aviso a la autoridad	1	1	0	0	0	2
Omisión de denuncia.	0	0	1	0	0	1
Omisión de socorro y exosición al peligro	1	0	2	0	0	3
Omisión o retardo injustificado de apoyo policial.	1	0	0	0	0	1
Patrocinio ilegal	0	0	1	1	0	2
Peculado	5	5	6	1	5	22
Peculado culposo	0	0	0	1	1	2
Peculado doloso	6	3	2	4	5	20
Peculado Doloso Agravado	1	0	3	0	2	6
Peculado por uso	2	1	0	0	0	3
Peligro por medio de incendio o explosión.	0	0	1	0	0	1
Pornografía infantil.	0	0	0	1	1	2
Posesión indebida de Teléfonos celulares o armas, Municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimiento penitenciario	13	3	0	0	0	16
Prevaricato	0	0	1	0	0	1
Producción, desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas	0	1	0	2	3	6
Promoción de atentados contra yacimientos arqueológicos.	0	1	0	2	0	3
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.	6	7	9	8	12	42
Promoción y favorecimiento de la prostitución.	0	0	2	2	0	4
Proxenetismo.	0	1	0	1	0	2
Receptación	7	7	4	14	11	43
Receptacion Aduanera	1	1	1	0	0	3

Delitos	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Receptación agravada	1	11	12	10	14	48
Rehusamiento del funcionario o servidor público a entregar bienes en custodia.	0	1	0	0	0	1
Reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización	4	0	2	0	0	6
Responsabilidad de funcionario Publico por otorgamiento ilegal de derechos.	0	0	4	0	0	4
Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas.	0	0	3	0	0	3
Responsabilidad por información falsa contenida en informes.	0	0	2	2	0	4
Retado injustificado en el pago.	2	0	0	0	0	2
Robo Agravado	32	42	29	39	60	202
Robo de ganado.	0	0	0	3	0	3
Robo.	3	9	2	4	8	26
Secuestro	1	1	0	3	0	5
Seducion, usurpacion y retencion ilegal de mando de tropas.	0	1	0	0	0	1
Substracción o arrebato de armas de guerra	1	0	0	0	0	1
Suplantación de identidad	0	1	0	0	0	1
Sustracción de menor	2	2	2	3	1	10
Tentativa	1	3	2	3	3	12
Terrorismo	0	0	0	0	7	7
Tráfico de influencias	1	1	2	1	2	7
Tráfico de moneda falsa	3	3	2	7	4	19
Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas	0	0	36	20	0	56
Tráfico ilegal de productos forestales maderables	1	0	221	112	18	352
Trata de Personas	0	0	0	1	0	1
Ursurpación Agravada	4	15	6	3	0	28
Uso de documentos falsos.	39	47	25	20	10	141
Uso de productos tóxicos o peligrosos.	0	0	0	0	1	1
Uso ilegal de productos pirotécnicos	1	0	3	2	1	7
Uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial	0	2	2	0	0	4
Usurpación	15	27	26	29	8	105
Usurpación de funciones o autoridad	2	2	1	0	0	5
Venta de medicinas adulteradas.	1	0	0	0	0	1
Violación a persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir.	0	1	1	0	0	2
Violación a persona en incapacidad de resistir.	3	2	1	0	0	6
Violación de correspondencia.	1	0	0	0	0	1
Violación de domicilio	0	2	3	2	1	8
Violación de la intimidad.	0	1	1	2	1	5
Violación de la libertad sexual (Agravante: a mano armada, con el concurso de más de dos personas, prevalencia de posición, etc).	1	1	0	0	1	3
Violación de la libertad sexual (Tipo base).	3	9	6	3	5	26
Violación sexual de Menor (entre 14 años y menos de 18 años)	5	6	2	2	1	16
Violación sexual de menor de edad (mayor de 10 y menor de 14 años de edad)	12	6	7	29	6	60
Violación sexual de menor de edad (menor de 10 años)	1	6	5	1	1	14
Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.	3	1	2	3	3	12
Violencia Familiar	0	0	0	1	10	11
Total	924	1324	3010	3872	4457	13587

Elaboración: Of. Estadístico- CSJLA

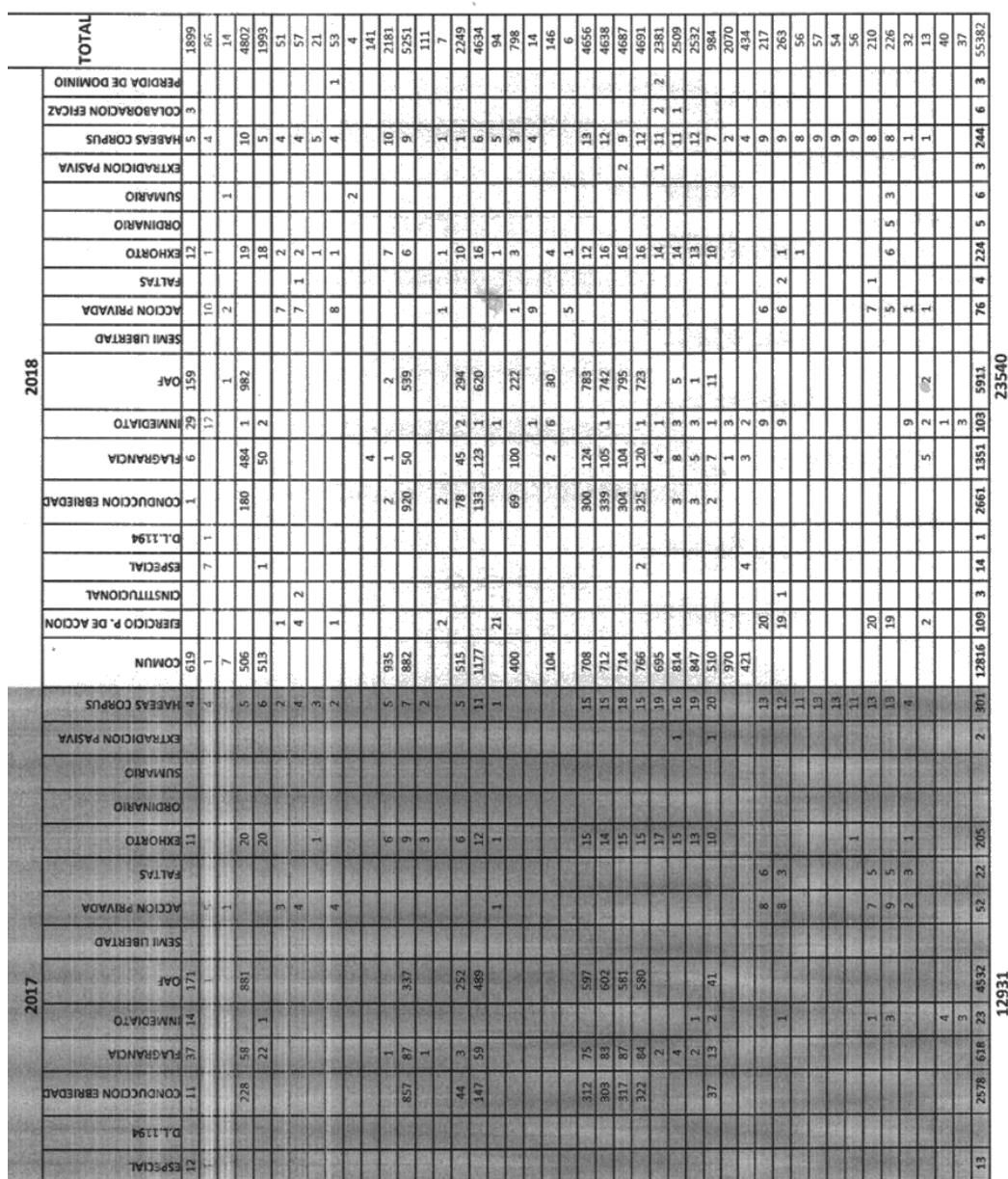
TIPO PROCESO

TIPO PROCESO	2015											2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	COMUN	EJERCICIO P. DE ACCION	CONSTITUCIONAL	ESPECIAL	D.L.1194	CONDUCCION EMBREIDAD	FLAGRANCIA	INMEDIATO	OAF	SEMI LIBERTAD	ACCION PRIVADA	FALTAS	EXHORTO	ORDINARIO	SUMARIO	EXTRADICION PASIVA	COMUN	EJERCICIO P. DE ACCION	CONSTITUCIONAL	ESPECIAL	D.L.1194	CONDUCCION EMBREIDAD	FLAGRANCIA	INMEDIATO	OAF	SEMI LIBERTAD	ACCION PRIVADA	FALTAS	EXHORTO	ORDINARIO	SUMARIO	EXTRADICION PASIVA	HABEAS CORPUS	COMUN	EJERCICIO P. DE ACCION	CONSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
JUZG. INVEST. PREPARATORIA - SEDE CUTERVO	254	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	1	2	39	9	76	210	22	509	1	1	1	13	8	1	166	3	335	3	3	2	1	2	1	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - SEDE CUTERVO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10568

8382





Mensaje nuevo

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpia

Mover a

Categorizar

...

↑

↓

×

Bandeja de ... 5968

Correo no desea... 2

Borradores 23

Elementos enviados

Elementos elimina...

Archivo

Conversation Hist...

Spambox

Carpeta nueva

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

✉

📅

🔍

...

Respuesta a solicitud de acceso a la información pública

L

Lizeth María Arteaga Muñoz <larteagam@pj.gob.pe>

Mié 06/03/2019 22:17

Usted

pdf

Penales 2014 - 2018.pdf

65 KB

Estimada señora Roxana Pistil:

A través del presente y, en respuesta a su solicitud del 01 de marzo de 2019, se remite un reporte alcanzado por la oficina de estadística sobre la cantidad de expedientes ingresados los juzgados penales de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por materias.

Respecto a su pedido sobre cantidad de expedientes sentenciados en los juzgados unipersonales de Chiclayo por proceso inmediato, le informo que el Sistema SJ no emite un reporte de este tipo; motivo por el cual no es posible atender su requerimiento.

De requerir alguna precisión sobre lo indicado, le agradeceré se apersona a la oficina de la unidad de servicios judiciales ubicada en el tercer piso de la avenida San José 1070, Chiclayo.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.

Atentamente.

Lizeth Arteaga

Funcionaria Responsable de atender las solicitudes formuladas al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

↶

↷



→

...

Parece que usa un bloqueador de anuncios. Para maximizar el espacio en la bandeja de entrada, regístrese en [Outlook sin anuncios.](#)

120

**ANEXO 4 : Solicitud presentada al Sistema de Información del Ministerio Público
de Lambayeque.**

	<p>MINISTERIO PÚBLICO Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE SECRETARÍA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>01 MAR. 2019</p> <p><i>[Firma]</i> Hora: 12:33</p> </div>		<p>SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM)</p>
FORMULARIO	<p>MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía de la Nación</p>		
	<p>N° DE REGISTRO</p>		

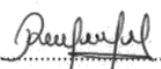
I.- FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN			
<i>Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores</i>			

II.- DATOS DEL SOLICITANTE			
Apellidos y Nombres / Razón Social		Documento de Identidad: D.N.I / L.M / Otro	
<i>Pisfil Porras Roxana Maribel</i>		<i>47061000</i>	
DOMICILIO			
Av./Calle/Jr./Psj	N° / Dpto / Int	Distrito	Urbanización
<i>CPM. Callanca Mz E Lt. 40</i>		<i>Monseñor</i>	
Provincia	Departamento	Correo electrónico	Teléfono
<i>Chiclayo</i>	<i>Lambayeque</i>	<i>maribel_1392@hotmail.com</i>	<i>957536274</i>

III.- INFORMACIÓN SOLICITADA:
<p>1) Solicitar la cantidad de carpetas fiscales ingresados a los Despachos fiscales de la ciudad de Chiclayo en los periodos 2014 al 2018 por materias.</p> <p>2) Solicitar la cantidad de carpetas fiscales concluidas o remitidas por los Despachos fiscales de la ciudad de Chiclayo por proceso inmediato en los periodos 2014 al 2018.</p>

IV.- DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:
<i>Gestión de Indicadores</i>

V.- FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con X)				
COPIA SIMPLE	<input checked="" type="checkbox"/>	DISKETTE	<input type="checkbox"/>	CD
CORREO ELECTRÓNICO			<input type="checkbox"/>	OTRO

<p>APELLIDOS Y NOMBRES</p> <p style="text-align: center;"><i>Pisfil Porras Roxana Maribel</i></p> <div style="text-align: center;">  FIRMA </div>	<p>FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

OBSERVACIONES.....

.....

.....

**ANEXO 5: Resultados de la Solicitud presentada al Sistema de Información del
Ministerio Público de Lambayeque.**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

*Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad*

**PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL
DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

Chiclayo, 15 de Marzo del 2019



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
VERA Jorge Juan FAU 20131370301
hard
Presidente De La Junta De Fiscales
Superiores Del D/La
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.03.2019 08:20:31 -05:00

CARTA N° 000021-2019-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE

Sr(a).

ROXANA MARIBEL PISFIL PARRAS

Dirección: CPM Callanca Mz. G. Lt. 40 - Monsefú

**Asunto : ATENCIÓN A SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, y a la vez, en atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada el 01MAR19, remitirle el Oficio N° 058-2019-FSPC-GI-LAMBAYEQUE del 12MAR19, emitido por la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Mixtas de Lambayeque, Carmen Graciela Miranda Vidaurre, mediante el cual brinda atención a su pedido de información.

† Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi mayor consideración. †

Atentamente,

JORGE JUAN ARTEAGA VERA

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores

Distrito Fiscal de Lambayeque

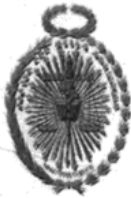
Adj. 07 folios.

JAV/agd
H.E. 2169-2019
Exp. MUPDFL20190002207



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado en el MPPN. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas.
CARTA N° 000021-2019-PJFS-LAMBAYEQUE Página 1 de 1

(511) 625-5555 - 208-5555
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú
www.fiscalia.gob.pe



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

AREA DE GESTION DE INDICADORES

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Chiclayo, 12 de marzo de 2019

OFICIO N° 058-2019-FSPC-GI-LAMBAYEQUE

Señor Doctor

Jorge Juan Arteaga Vera

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE

Presente. -



Referencia: Oficio N° 858-2019-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia, remitirle adjunto al presente a fs. 06, los cuadros estadísticos correspondientes al **i)** número de denuncias ingresadas a las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo durante el periodo 2014-2018, por materia, **ii)** número de casos concluidos con aplicación del proceso inmediato en todo el Distrito Fiscal de Lambayeque, durante el periodo 2014-2018, conforme al requerimiento formulado por la ciudadana Roxana Maribel Pisfil Parras; significándole a usted que es todo cuanto se puede obtener del Sistema de Gestión Fiscal - SGF.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Carmen Graciela Miranda Vidaurre
FISCAL SUPERIOR PENAL
Coordinadora de las Fiscalías Provinciales
Penales Corporativas y Mixtas de Lambayeque

CGMV/ima

ESTADÍSTICA DE DENUNCIAS INGRESADAS A LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE CHICLAYO
POR DELITO SUBGENÉRICO
DURANTE EL PERIODO 2014-2018

DELITO GENÉRICO / DELITO SUBGENÉRICO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1FPPC-CHICLAYO	4,604	5,377	7,013	7,096	8,445	32,535
CONTRA EL PATRIMONIO	2,216	2,809	3,503	3,437	3,994	15,959
CONTRA EL PATRIMONIO	1,746	2,257	2,698	2,800	3,402	12,903
HURTO	119	165	301	255	228	1,068
ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES	119	145	123	102	118	607
ROBO	56	57	182	107	84	486
EXTORSION	62	68	57	29	36	252
APROPIACION ILICITA	48	41	50	62	46	247
USURPACION	43	43	41	27	19	173
DAÑOS	6	20	33	29	34	122
RECEPTACION	10	10	13	21	19	73
FRAUDE EN LA ADMINISTR. DE PERS. JURID.	5	3	5	5	5	23
ABIGEATO					3	3
DELITOS INFORMATICOS	2					2
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	397	475	1,227	1,390	2,370	5,859
LESIONES	45	63	802	902	1,956	3,768
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	339	395	406	473	406	2,019
HOMICIDIO	6	10	10	5	4	35
EXPOS. PEL. O ABAND. DE PERS. EN PELIGRO	5	6	9	5	2	27
ABORTO	2	1		5	2	10
CONTRA LA FAMILIA	520	547	617	692	666	3,042
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR	498	511	571	648	621	2,849
ATENTADOS CONTRA LA PATRIA POTESTAD	21	33	46	44	41	185
MATRIMONIOS ILEGALES	1	2			2	5
CONTRA EL ESTADO CIVIL		1			1	2
CONTRA LA FAMILIA					1	1
CONTRA LA LIBERTAD	403	484	613	639	577	2,716
CONTRA LA LIBERTAD	354	414	531	562	496	2,357
VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL	19	31	36	36	41	163
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL	13	15	26	20	23	97
VIOLACION DE DOMICILIO	3	14	12	10	10	49
VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO	5	3	1	3	4	16
OFENSAS AL PUDOR PUBLICO	3	4	4	4		15
VIOLACION DE LA INTIMIDAD	2		1	3	1	7
PROXENETISMO	1	1	2		1	5
VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICAC.	2				1	3
VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL	1			1		2
PROXENETISMO (FAVORECER LA PROSTITUCION)		1				1
VIOLACION DE LA LIBERTAD DE EXPRESION		1				1
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	511	526	567	511	408	2,523
DELITO DE PELIGRO COMUN	378	391	460	443	346	2,018
CONTRA LA SALUD PUBLICA	128	132	103	64	57	484
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	3	3	4	2	3	15
CONT.MED.TRASP.COMUN.Y.OTRAS.OBRAS.PUBL.	2			2	2	6
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	313	304	253	226	254	1,350
DELITO COMETIDO POR PARTICULARES	97	89	79	96	130	491
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	109	127	73	47	46	402
DEL. COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS	97	80	83	71	68	399
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	10	7	17	12	10	56
DEL. COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS			1			1
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		1				1
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	167	156	145	108	114	690
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	76	83	73	41	57	330
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL	58	62	62	52	42	276
DISPOSICIONES COMUNES	31	9	10	15	15	80
FALSIF.DE SELLOS.TIMBRES.MARCAS OFICIAL)	2	2				4
CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO	23	11	20	20	3	77
DELITOS MONETARIOS	20	10	18	17	3	68
DELITOS FINANCIEROS	3		1	1		5
CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO		1	1	2		4
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	17	8	6	28	8	67
DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA	13	5	3	17	6	44
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	4	1	3	11	2	21
TERRORISMO		2				2
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		6	13	14	24	57
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		3	10	8	22	43
DELITOS INFORMATICOS CONTRA EL PATRIMONIO		3	2	4	2	11
DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA INDEMNIDAD Y LIBERTAD SEXUALES			1	1		2
DELITOS CONTRA DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS				1		1
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES	3	12	16	5	5	41

DELITO GENÉRICO / DELITO SUBGENÉRICO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	3	7	12	5	4	31
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES		2	2		1	5
CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS		3	2			5
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS	9	10	8	2	6	35
LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO		3	7	1	5	16
LIBRAMIENTOS INDEBIDOS	7	5			1	13
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS	2	1	1			4
USURA		1		1		2
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)	4	11	14	4	2	35
CONTRABANDO (D.ADUAN.)	4	10	12	3	2	31
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)			2	1		3
DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA		1				1
CONTRA EL HONOR	3	4	2	11	2	22
CONTRA EL HONOR	3	3	2	8	1	17
INJURIA,CALUMNIA Y DIFAMACION		1		3	1	5
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	3	4	3	2	3	15
CONTRA LOS BIENES CULTURALES	2	4		2	1	9
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	1		3		2	6
DELITOS TRIBUTARIOS	7	2	2		4	15
DEFRAUDACION TRIBUTARIA	3	1	2		2	8
CONTRABANDO (D.TRIB.)	4					4
DELITOS TRIBUTARIOS					2	2
ELABORAC.Y COMERC.CLANDEST.DE PRODUCTOS)		1				1
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR	4	1	1		2	8
DELITOS CONTRA EL DERECHO AL SUFRAGIO	4		1		1	6
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR		1			1	2
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO	2	2	1	2		7
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO	1			2		3
DE OTROS DELITOS ECONOMICOS		2				2
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS	1					1
ACAPARAMIENTO, ESPECULACION, ADULTERACION			1			1
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD	1	2		1	1	5
DISCRIMINACION	1	1		1		3
TORTURA		1			1	2
DELITOS AMBIENTALES		2		1	1	4
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL E INFORMACION FALSA				1	1	2
DELITOS DE CONTAMINACION		2				2
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES				1	1	2
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES				1	1	2
DECRETO LEY 25475 (TERRORISMO)		1		1		2
DECRETO LEY 25475 (TERRORISMO)		1		1		2
D.LEG 813 LEY PENAL TRIBUTARIA			1	1		2
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA				1		1
DEFRAUDACION TRIBUTARIA			1			1
CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL			1			1
ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL Y TRAICION A LA PATRIA			1		1	1
LEY 27718(DELITO TRANSP, COMERC. PRODUC. PIROTEC.)	1					1
LEY DE REGULACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS	1					1
IFPPC-CHICLAYO	4,878	5,358	6,334	7,869	9,036	33,475
CONTRA EL PATRIMONIO	2,256	2,714	3,066	3,575	4,294	15,905
HURTO	908	1,242	1,436	1,666	2,292	7,544
ROBO	221	330	709	717	1,039	3,016
CONTRA EL PATRIMONIO	594	599	386	493	277	2,349
ESTAFAY OTRAS DEFRAUDACIONES	182	155	150	166	203	856
DAÑOS	52	117	126	151	162	608
USURPACION	107	111	100	114	108	540
APROPIACION ILCITA	95	58	51	76	68	348
RECEPTACION	16	29	35	139	84	303
EXTORSION	73	64	68	41	53	299
FRAUDE EN LA ADMINSTR. DE PERS. JURID.	7	6	5	12	8	38
DELITOS INFORMATICOS	1	3				4
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	344	419	1,162	1,982	2,653	6,560
LESIONES	178	219	988	1,754	2,457	5,596
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	144	153	135	200	166	798
HOMICIDIO	10	30	25	18	21	104
EXPOS. PEL. O ABAND. DE PERS. EN PELIGRO	5	8	8	6	6	33
ABORTO	7	9	6	4	3	29
CONTRA LA FAMILIA	597	665	603	706	619	3,190
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR	569	639	571	673	570	3,022
ATENTADOS CONTRA LA PATRIA POTESTAD	28	26	30	31	48	163
MATRIMONIOS ILEGALES			1	1	1	3
CONTRA EL ESTADO CIVIL			1	1		2
CONTRA LA LIBERTAD	458	463	528	560	563	2,572
CONTRA LA LIBERTAD	184	209	220	244	261	1,118
VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL	148	152	145	152	143	740
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL	100	78	123	126	121	548

DELITO GENÉRICO / DELITO SUBGENÉRICO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO	9	2	5	7	2	25
OFENSAS AL PUDOR PUBLICO	3	4	3	3	8	21
VIOLACION DE LA INTIMIDAD		2	2	1	9	14
PROXENETISMO			2	2	1	5
PROXENETISMO (FAVORECER LA PROSTITUCION)		2				2
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	482	549	496	545	393	2,465
DELITO DE PELIGRO COMUN	382	417	384	446	335	1,964
CONTRA LA SALUD PUBLICA	94	127	109	88	56	474
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	5	2	2	11	2	22
CONT.MED.TRANSP.COMUN.Y.OTRAS.OBRAS.PUBL	1	3	1			5
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	454	327	260	279	276	1,596
DELITO COMETIDO POR PARTICULARES	122	114	92	111	139	578
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	190	107	72	72	59	500
DEL. COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS	90	89	84	83	64	410
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	52	17	11	13	11	104
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			1		2	3
DELITOS COMETIDOS POR PATICULARES					1	1
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	195	130	126	107	126	684
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL	99	77	67	67	65	375
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	59	28	33	24	38	182
DISPOSICIONES COMUNES	36	25	26	16	22	125
FALSIF.DE SELLOS.TIMBRES.MARCAS OFICIAL)	1				1	2
CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO	29	19	17	24	19	108
DELITOS MONETARIOS	28	19	17	23	19	106
DELITOS FINANCIEROS	1			1		2
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	11	18	11	35	13	88
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	4	9	6	26	6	51
DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA	7	9	5	9	7	37
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		5	9	25	47	86
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		5	7	13	40	65
DELITOS INFORMATICOS CONTRA EL PATRIMONIO			2	11	3	16
DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA INDEMNIDAD Y LIBERTAD SEXUALES				1	2	3
DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA FE PÚBLICA					1	1
DELITOS INFORMATICOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES					1	1
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS	20	9	12	7	10	58
LIBRAMIENTOS INDEBIDOS	20	6				26
LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO		2	8	6	9	25
ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO			2	1		3
USURA		1			1	2
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS			2			2
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES	3	15	19	15	6	58
CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	2	8	15	14	5	44
CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS	1	2	4		1	8
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES		5		1		6
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)	12	14	9		2	37
CONTRABANDO (D.ADUAN.)	11	10	7		1	29
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)		4	2		1	7
DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA	1					1
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR	9	2	6	2	6	25
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR	3	2	4	2	6	17
DELITOS CONTRA EL DERECHO AL SUFRAGIO	6		2			8
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	5	3	4	2	2	16
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	2	2	3	1	2	10
CONTRA LOS BIENES CULTURALES	3	1		1		6
DELITOS TRIBUTARIOS		2	3		1	6
DEFRAUDACION TRIBUTARIA		2	3		1	6
D.LEG 813 LEY PENAL TRIBUTARIA		1	1	4		6
D.LEG 813 LEY PENAL TRIBUTARIA			1	4		5
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA		1				1
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD			1	1	2	4
DISCRIMINACION			1	1	1	3
DESAPARICION FORZADA					1	1
CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL	1	1			2	4
ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL Y TRAICION A LA PATRIA	1	1				2
DELITOS CONTRA LOS SIMBOLOS Y VALORES DE LA PATRIA					1	1
CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL					1	1
CONTRA EL HONOR	2				1	3
CONTRA EL HONOR	2				1	3
DELITOS AMBIENTALES		1				1
DELITOS AMBIENTALES		1				1
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES					1	1
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES					1	1
LAVADO DE ACTIVOS		1				1
LAVADO DE ACTIVOS		1				1
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO			1			1
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS			1			1
3FPPEC-CHICLAYO	4,162	5,301	6,651	7,623	8,719	32,456

03

DELITO GENÉRICO / DELITO SUBGENÉRICO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
CONTRA EL PATRIMONIO	1,908	2,675	3,351	3,550	4,159	15,643
HURTO	382	832	1,206	1,172	1,894	5,486
CONTRA EL PATRIMONIO	696	806	836	1,024	638	4,000
ROBO	356	468	755	685	953	3,217
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES	160	195	160	156	179	850
DAÑOS	67	124	149	187	169	696
USURPACION	105	104	87	87	115	498
APROPIACION ILÍCITA	57	44	71	62	64	298
EXTORSION	69	67	61	36	54	287
RECEPTACION	14	26	22	138	82	282
FRAUDE EN LA ADMINISTR. DE PERS. JURID.	2	4	4	3	8	21
DELITOS INFORMATICOS		5				5
ABIGEATO					3	3
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	343	460	1,071	1,718	2,471	6,063
LESIONES	142	205	777	1,391	2,212	4,727
CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	174	214	247	295	221	1,151
HOMICIDIO	20	27	28	18	23	116
EXPOS. PEL. O ABAND. DE PERS. EN PELIGRO	1	6	15	9	7	38
ABORTO	6	8	4	5	8	31
CONTRA LA FAMILIA	443	639	612	738	604	3,036
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR	423	595	551	674	551	2,794
ATENTADOS CONTRA LA PATRIA POTESTAD	18	39	58	63	50	228
CONTRA LA FAMILIA	1	2	2	1	1	7
MATRIMONIOS ILEGALES	1	1	1		1	4
CONTRA EL ESTADO CIVIL		2			1	3
CONTRA LA LIBERTAD	388	514	589	561	549	2,601
CONTRA LA LIBERTAD	161	190	250	196	237	1,034
VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL	132	185	181	207	165	870
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL	74	110	132	132	112	560
VIOLACION DE DOMICILIO	12	16	15	16	11	70
OFENSAS AL PUDOR PUBLICO	1	2	1	5	11	20
VIOLACION DE LA INTIMIDAD	2	1	3	1	8	15
PROXENETISMO	1	4	2	3	2	12
VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO	3	2	4		2	11
PROXENETISMO (FAVORECER LA PROSTITUCION)		4	1			5
VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL				1	1	2
VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICAC.	2					2
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	457	473	528	551	369	2,378
DELITO DE PELIGRO COMUN	350	329	385	477	291	1,832
CONTRA LA SALUD PUBLICA	101	142	124	70	75	512
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	3		16	4		23
CONT.MED.TRANSP.COMUN.Y.OTRAS.OBRAS.PUBL	3	2	3		3	11
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	348	282	267	242	288	1,427
DELITO COMETIDO POR PARTICULARES	123	90	84	102	157	556
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	101	118	95	49	47	410
DEL. COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS	95	55	84	86	73	393
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	29	19	3	5	11	67
DEL.CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			1			1
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	193	160	128	113	115	709
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL	82	87	52	48	56	325
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	81	51	52	37	43	264
DISPOSICIONES COMUNES	28	20	24	27	15	114
FALSIF.DE SELLOS.TIMBRES.MARCAS OFICIAL)	2	2		1	1	6
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		5	37	61	74	177
DELITOS INFORMATICOS CONTRA EL PATRIMONIO		1	10	46	26	83
LEY Nº 30096, LEY DE DELITOS INFORMATICOS		3	21	12	38	74
DELITOS INFORMATICOS CONTRA LA INDEMNIDAD Y LIBERTAD SEXUALES			2	1	4	7
DELITOS CONTRA DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS		1	1	1	4	7
DELITOS INFORMATICOS CONTRA LA FE PÚBLICA			3	1	1	5
DELITOS INFORMATICOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES					1	1
CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO	28	21	18	23	16	106
DELITOS MONETARIOS	25	18	17	22	15	97
DELITOS FINANCIEROS	2	1	1	1	1	6
CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO	1	2				3
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	10	16	11	29	11	77
DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA	5	13	7	14	7	46
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA	5	3	4	15	4	31
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS	10	15	8	11	9	53
LIBRAMIENTOS INDEBIDOS	10	12	1			23
LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO		2	4	8	9	23
USURA		1	1	3		5
CONTRA LA CONF.Y.LA.BUEN.FE.EN.NEGOCIOS			2			2
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES	6	15	17	6	7	51
CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5	4	14	4	6	33
CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS		9	2	2	1	14
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES	1	2	1			4
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)	14	15	5	3	4	41

DELITO GENÉRICO / DELITO SUBGENÉRICO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
DELITOS ADUANEROS (LEY 28008)	10	11	2	2	1	26
CONTRABANDO (D.ADUAN.)	4	4	3	1	2	14
RECEPTACIÓN ADUANERA					1	1
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES			1		28	29
LEY 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES			1		28	29
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	4	3	3	4	3	17
CONTRA LOS BIENES CULTURALES	1	3	2	3	1	10
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	3		1	1	2	7
LAVADO DE ACTIVOS	3			7	3	13
LAVADO DE ACTIVOS	3			7	3	13
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR	1	2			5	8
DELITOS CONTRA EL DERECHO AL SUFRAGIO	1	1			3	5
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR		1			2	3
DELITOS TRIBUTARIOS	3	2	1	2		8
DEFRAUDACION TRIBUTARIA	3			2		5
ELABORAC.Y COMERC.CLANDEST.DE.PRODUCTOS)			1	1		2
DELITOS TRIBUTARIOS		1				1
CONTRA EL HONOR		1		1	2	4
CONTRA EL HONOR		1		1	2	4
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO	2	1		1		4
DE OTROS DELITOS ECONOMICOS	2					2
VENTA ILICITA DE MERCADERIAS				1		1
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO		1				1
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD		1		1	2	4
DISCRIMINACION		1		1	2	4
D.LEG 813 LEY PENAL TRIBUTARIA			2	1		3
D.LEG 813 LEY PENAL TRIBUTARIA			1	1		2
DEFRAUDACION TRIBUTARIA			1			1
DELITOS AMBIENTALES		1	1			2
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL E INFORMACION FALSA		1				1
DELITOS DE CONTAMINACION			1			1
D.LEG. Nº 1106 LAVADO DE ACTIVOS			1			1
D.LEG. Nº 1106 LAVADO DE ACTIVOS			1			1
CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL	1					1
ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL Y TRAICION A LA PATRIA	1					1
TOTAL GENERAL	13,644	16,036	19,998	22,588	26,200	98,466

Fuente: Sistema de Gestión Fiscal - SGF
Elaborado por: Gestión de Indicadores

05

**ESTADÍSTICA DE CASOS CONCLUIDOS CON PROCESO INMEDIATO EN EL
DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

	AÑO						TOTAL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (FEB)	
PROCESO INMEDIATO	3	9	138	135	129	23	504

Fuente : Sistema de Gestión Fiscal - SGF
Elaborado por : Gestión de Indicadores